

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA



FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

“INSTITUCIONES JURÍDICAS PENITENCIARIAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN NICARAGUA”

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN DERECHO

AUTOR: YADER RAMÓN ROJAS REYES

TUTOR: JOSÉ RAMÓN ROJAS URROZ

Managua, Nicaragua, Junio de 2010

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

CAPÍTULO PRIMERO

“EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL DE NICARAGUA”

1. Principios y Objetivos Fundamentales de la Administración Penitenciaria.
2. Organización Estructural y Funcional de la Administración Penitenciaria.
3. Los Establecimientos Penitenciarios.

CAPÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN, TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL.

1. La Reinserción Social en el Sistema Jurídico Nicaragüense.
2. El Expediente Penitenciario.
3. Diferencia Entre Régimen Penitenciario y Tratamiento Penitenciario.
4. El Régimen Penitenciario de los Privados Preventivos de Libertad.
5. Clasificación del Régimen Penitenciario.
 - a) Régimen de Adaptación.

- b) Régimen Laboral.
 - c) Régimen Semiabierto.
 - d) Régimen Abierto.
 - e) Régimen de Convivencia Familiar.
- 6. Aplicación del Sistema Progresivo.
 - 7. El Régimen Disciplinario de los Privados de Libertad.
 - 8. El Régimen de Seguridad Penitenciaria.

CAPÍTULO TERCERO

LOS DERECHOS PENITENCIARIOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

- 1. Derechos Penitenciarios Generales.
- 2. Derechos Penitenciarios de las Mujeres Privadas de Libertad.
- 3. Derechos Penitenciarios de los Adolescentes Privados de Libertad.
- 4. Los Estímulos Penitenciarios.
- 5. Los Permisos de Salida, Comunicaciones y Visitas.
- 6. Tratamiento Médico y Psicológico del Interno.

CAPÍTULO CUARTO

LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO PENAL

- 1. La Prisión en Nuestro Sistema Legal.
- 2. La Ejecución de las Penas Privativas de Libertad en Nuestro Código Penal Sustantivo.
- 3. Formas Sustitutivas de la Ejecución de las Penas Privativas de Libertad.

- a) Suspensión de la Pena de Prisión;
 - b) Suspensión de la Pena de Prisión Por Enfermedad Grave;
 - c) Sustitución de la Pena de Prisión;
 - d) Sustitución Excepcional de la Pena de Prisión;
 - e) La Expulsión del Territorio Nacional;
 - f) La Libertad Condicional;
 - g) La Libertad Condicional Extraordinaria;
 - h) La Acción de Revisión de la Sentencia.
4. La Extinción de la Responsabilidad Penal y sus Efectos.
 5. Las Medidas de Seguridad Privativas de Libertad.
 6. El Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.
 7. El Incidente de Ejecución de Pena.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

LISTA DE REFERENCIAS

ANEXOS

A LA HUMANIDAD ENTERA

AGRADEZCO...

...en gran medida, la colaboración de dos grandes personas y de una gran institución, los primeros son mi tutor y hermano: José Ramón Rojas Urroz, y mi padre: José Ramón Rojas Méndez, quienes con sus amplios conocimientos en la materia me iluminaron constantemente, despejando mis dudas. Luego está la UCA, mi Universidad, la que me acogió por mucho tiempo y me enseñó los valores de ser profesional y, en especial, de ser jurista.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo monográfico pertenece a la rama del Derecho Penitenciario, considerado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad¹. Dentro de esta rama del Derecho abordaré la problemática de la **Reinserción Social de los Privados de Libertad en el Sistema Penitenciario de Nicaragua**. En este trabajo analicé las normativas legales que constituyen el Derecho Penitenciario Nicaragüense en busca del reconocimiento del fenómeno de la Reinserción Social de los Privados de Libertad. Voy a dejar para los estudiosos de la Sociología Jurídica Penitenciaria, el análisis de las realidades materiales del sistema en cuestión y me dedicaré exclusivamente al estudio de los aspectos puramente formales.

El contenido de este trabajo está estructurado en cuatro capítulos, el primero de los cuales está titulado como **“El Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua”**, en el cual estudiaremos los Principios y Objetivos Fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional, su Estructura Orgánica y Principales Funciones y por último expondré las normativas relacionadas al funcionamiento interno de cada Centro o Establecimiento Penitenciario. Luego tenemos el capítulo segundo titulado **“Régimen, Tratamiento Penitenciario y Reinserción Social”**, aquí veremos de forma detallada en cuales cuerpos normativos nacionales e internacionales se reconoce el Derecho de los Privados de Libertad a la Reinserción Social, estudiaremos los conceptos de Régimen Penitenciario y Tratamiento Penitenciario y sus diferencias, y cuales son los tipos de regímenes penitenciarios reconocidos por nuestro Derecho Penitenciario, estudiaremos el concepto y la aplicación del Sistema Progresivo en Nicaragua, de la misma forma conoceremos el Régimen Disciplinario establecido por nuestro Derecho Penitenciario para los Privados de Libertad. En el capítulo tercero titulado **“Los Derechos Penitenciarios de los Privados de libertad”**, abordaremos, como es obvio, los derechos, beneficios, garantías y estímulos consagrados en nuestra Constitución Política, en los Convenios Internacionales y en la Legislación Común para los privados

¹ García Valdés, C. Introducción al Derecho Penitenciario Español. pág. 4.

de libertad en el proceso de reintegrarse efectivamente a la sociedad. Por último tenemos el capítulo cuarto: **“La Ejecución de La Pena Privativa de Libertad en nuestro Sistema Jurídico Penal”**, aquí estudiaré la Ejecución de las Penas y Medidas Privativas de Libertad en el Derecho Penal Nicaragüense, las Formas Sustitutivas de Ejecución de la Pena de Prisión, el Incidente Procesal de Ejecución y las Funciones de los Jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria en materia de Penas Privativas de Libertad.

Debo aclarar que durante la exposición escrita de este trabajo me referiré a las Personas Privadas de Libertad con el calificativo de **“Internos”**, por la razón de que estudio a estas personas con relación al poder de sujeción que ejerce la Administración Penitenciaria sobre ellas, es decir voy a estudiar a las personas privadas de libertad como internos en un Establecimiento sujetos a la Administración Penitenciaria. También quiero aclarar que a la hora de referirme al Sistema Penitenciario Nacional lo haré como a la Administración Penitenciaria, y de esa manera eliminar la vaguedad que produce el término *“sistema”*, que puede ser entendido como un todo integrador tanto del poder público penitenciario y del ordenamiento jurídico que lo rige.

En este trabajó tomo como basamentos legales principales a la **Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena** y su **Reglamento**, aprobados, respectivamente, el 11 de Septiembre del 2003 y el 12 de Marzo del 2004, y a la Ley 641 de **Código Penal** de la República de Nicaragua, publicado en mayo de 2008, y a la Ley No. 406 de **Código Procesal Penal**, publicada en diciembre de 2001. Dejo a un lado cualquier análisis de las disposiciones relativas a la materia de ejecución de las penas privativas de libertad establecidas en el **Código Penal de 1974**², el cual ha sido formalmente derogado por el Nuevo Código Penal (Arto. 566 C.P.), a pesar de que sus disposiciones han quedado vivas para aquellos casos penales que se llevaron antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, siempre y cuando se tome en cuenta la Excepción de Retroactividad de la ley Penal en beneficio del reo o condenado (Arto. 567 C.P.). Esta exclusión la hago por motivos metodológicos, ya que este no es un

² Decreto No. 297, **“Ley de Código Penal”**, publicada en la Gaceta No. 96 del 3 de mayo de 1974.

trabajo comparativo, y, también por que no quise hacer una mixtura en este trabajo sobre los aspectos relativos a la ejecución de la pena establecidos en ambos códigos penales, ya que esta iba a ser vana, debido a que en aspectos penitenciarios y de ejecución de pena el Nuevo Código Penal es más completo que el Código Penal derogado, y en la práctica aquel es más aplicado para estos fines que este último.

Introduciéndolos a la materia debo decir que la **Pena Privativa de libertad** es, ontológicamente hablando, una limitación del ejercicio del derecho a la libertad, esta limitación es impuesta por un Juez Sentenciador, es ejecutada por un ente gubernamental o sea por una Administración Penitenciaria (en nuestro caso es el Sistema Penitenciario Nacional), además el cumplimiento de esta sanción es vigilada efectivamente por otra autoridad jurisdiccional, llamada, en nuestro Sistema Legal, Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

La Pena Privativa de Libertad es el resultado de la humanización de las sanciones penales, vino a sustituir la imposición de las penas corporales, que suponían un castigo excesivamente inhumano y degradante. En la actualidad las legislaciones de casi todos los países descartan la consideración de la pena Privativa de Libertad como una retribución por el mal cometido, y consideran a esta sanción como un instrumento destinado, por una parte, para intentar motivar a los individuos a que no delincan, (este fin se conoce como **prevención general específica**), y, por otra, para crear en la sociedad la confianza necesaria en el ordenamiento jurídico-punitivo (esta finalidad es conocida como **prevención general genérica**), y, además, en su aplicación concreta, esta pena sirve como un medio para intentar evitar que, quien ya lesionó o puso en peligro un bien jurídico, vuelva a comportarse de esa misma manera (**prevención especial**), o sea para tratar de reinsertarlo a la sociedad. Esta finalidad de prevención especial está consagrada en nuestro ordenamiento por mandato constitucional.

Pero, como es que en Nicaragua llegamos a este punto, de reconocer en la privación de libertad más que una venganza estatal una oportunidad o un cauce para tratar la criminalidad de los condenados, y es que nuestro Sistema Penitenciario arranca de los

modelos progresivos instaurados en Europa, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos a lo largo de los siglos XVIII y XIX, luego este sistema se empezó a aplicar en España y de aquí, por tradición jurídica, nos llega a nosotros³. La característica común de los **Sistemas Progresivos** radica en el hecho de que la ejecución de la pena se realiza por estadios hacia la libertad, en consideración a la conducta del penado, hasta logra la Reinserción Social.

Desde un punto de vista sociológico, la reinserción social, también conocida como resocialización, **readaptación social, reeducación social, rehabilitación social**⁴, está encaminada a que la persona privada de libertad durante su régimen carcelario pueda comprender la magnitud del hecho ilícito cometido, asuma la responsabilidad de éste, y una vez que cumpla su pena pueda reintegrarse a la sociedad.

Desde el punto de vista jurídico la **Reinserción Social** puede entenderse como el estatus de la persona que ha sido condenada a una pena y que ha cumplido con todas las disposiciones legales y administrativas para obtener un beneficio más o menos amplio en relación a la integración con la sociedad. Con esta integración social el condenado vuelve a retomar las normas públicas de conducta. En definitiva la reinserción social es un estatus en donde el condenado, según las valoraciones de las autoridades competentes, retoma su derecho a la libertad, en todas o algunas de sus manifestaciones, y en la amplitud que estas mismas determinen.

Pero no debemos ignorar que el **Tratamiento Penitenciario** para lograr la Reinserción Social de los Privados de Libertad es una tarea esencialmente de la rama psicológica,

³ Debemos estar clara de que en España ya no se habla de **Sistema Progresivo**, sino de **Sistema de Individualización Científica**, que se diferencia del otro por una característica sustancial, ya que en este último sistema, se permite acceder a estadios de mayor libertad sin necesidad de pasar obligatoriamente por los anteriores. Por el mismo fenómeno de traspaso de instituciones jurídicas por tradición común, esperemos que en nuestro país, se de un cambio de Sistema de Régimen Penitenciario, concretamente el cambio al Sistema de Individualización Científica.

⁴ Sandoval Huertas, E. (1998). **Penología, Partes General y Especial**. Pág. 111.

pedagógica y sociológica o si se quiere psicosocial y educativa, pero que tiene lugar en un marco jurídico, garantizador de los derechos del interno⁵. El objetivo de este trabajo es conocer este marco jurídico regulador del Régimen y Tratamiento Penitenciario.

Por último, considero que la **Reinserción Social** no es posible sin una reducción de la pena privativa de libertad⁶, ya sea cualitativamente, o sea reducir su intensidad, o cuantitativamente, reducir su duración, y esto se logra a través de la implementación de sanciones alternativas a la prisión y el otorgamiento de beneficios y estímulos penitenciarios a los privados de libertad. Tanto la reducción cuantitativa como la cualitativa tienen como fin darle al privado de libertad, en el primero de los casos una liberación más próxima en el tiempo de la sujeción penitenciaria y por el otro lado el otorgamiento al interno de libertades y beneficios para comunicarse con el mundo exterior, pero siempre sometido a la sujeción penitenciaria.

⁵ Segovia Bernabé, J. L. (s. f.). **Problemática En Torno A La Reinserción Social**, (s. n.).

⁶ Debemos saber que las Penas Privativas de Libertad constan de dos elementos: **duración e intensidad**. La duración puede ser desde un día hasta toda la vida del condenado, por otra parte su intensidad deriva del régimen penitenciario, según el grado de aislamiento (en el que influye no solo la vida en comunidad o en celda, sino la comunicación con el exterior), el local donde se cumple, el trato, etc.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No existe actualmente en Nicaragua un estudio jurídico sistemático y descriptivo de todas las instituciones, mecanismos, normativas legales nacionales e internacionales destinadas a la reintegración en la vida social de los privados de libertad en Nicaragua. La mayoría de los autores se limitan a las normativas legales nacionales básicas, como la Ley Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena y su respectivo Reglamento, y su estudio tiende a ser simplista con una metodología de estudio netamente enunciativa y literal del contenido de dichas normativas. Esta situación propicia el desconocimiento por parte, incluso de los propios abogados defensores de los privados de libertad, y por parte de los familiares de las normativas beneficiarias de los privados de libertad, lo cual se refleja en una inseguridad e inaplicabilidad de dichas normas penitenciarias.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

A lo largo de mi carrera me he encontrado con abogados de personas que han sido condenados a penas privativas de libertad, los cuales no tienen un conocimiento bien fundamentado de los procedimientos judiciales y administrativos, y de los derechos, garantías y recursos aplicables a los casos específicos que llevan. Es por esta razón que me he propuesto llevar a cabo este trabajo, para que sirva de una guía práctica a los abogados, estudiantes y estudiosos del Derecho que llevan casos de ejecución y vigilancia penitenciaria.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las instituciones, normas y los mecanismos jurídicos penitenciarios, aplicables a los privados de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional, destinadas para su Reinserción Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dar a conocer la estructura orgánica y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua;
2. Dar a conocer las Instituciones Jurídicas Penitenciarias establecidas en el Ordenamiento Jurídico nicaragüense y en el Derecho Internacional destinadas al Tratamiento de los Privados de Libertad para lograr su Reinserción Social;
3. Dar a conocer los Derechos, Beneficios y Garantías Penitenciarias de los Privados de Libertad consagrados en nuestra Constitución Política, en los Convenios Internacionales y en la Legislación Común para los privados de libertad en el proceso de reintegrarse efectivamente a la sociedad.
4. Estudiar la Ejecución de las Penas y Medidas Privativas de Libertad en el Derecho Penal Nicaragüense.

HIPÓTESIS

La reinserción social depende de la persona, del interno, sus compromisos y objetivos, sin embargo el recluso por lo general desconoce de sus derechos y garantías beneficiarias para lograr la querida reinserción, es ahí donde entran en juego: la Familia, los abogados, la Iglesia, Organización de Derechos Humanos, las Autoridades Judiciales y Penitenciarias para guiarles en su camino, dándole a conocer las normas que imponen obligaciones de comportamiento y las que otorgan derechos y garantías por sus buenas conductas y cualidades personales.

METODOLOGÍA

Para este proyecto de investigación emplearé el método científico- jurídico- documental, descriptivo y sintético, de todas las normativas nacionales e internacionales que beneficien a los privados de libertad en su reintegración social. Para lo cual recurriré a las bibliotecas más vastas de Managua, como la Biblioteca José Coronel Urtecho, la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua, la Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia. También recurriré a las bases de datos que la Biblioteca de la UCA tiene disponible, a las páginas web especializadas en Derecho Penitenciario. También recurriré a las instituciones penitenciarias de Managua, como el Centro Penitenciario de Tipitapa y la Esperanza, en donde entrevistaré a los encargados sobre las normativas aplicables en materia de reinserción social.

CAPÍTULO PRIMERO:

“EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL DE NICARAGUA”

1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

En Nicaragua la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, Ley No. 473⁷, regula el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y la actividad de éste en materia de ejecución de las penas y medidas cautelares privativas de libertad, tales como Control, Reeducción, Seguridad Penal y la Reinserción Social de los Privados de Libertad. Esta Ley establece como fin primordial de la ejecución de la pena, la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

El arto. 2 de esta Ley ordena que toda actividad oficial realizada por las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deba regirse bajo el **Principio Constitucional de Legalidad** consagrado en el Arto. 183 de nuestra Constitución Política⁸. Esta institución especializada del Estado debe hacer valer los derechos y garantías de los privados de libertad consagrados en la Constitución Política, las leyes de la materia, las normativas reglamentarias e internas del Sistema, así como los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Nicaragua.

En base al Artículo 6 de la Ley 473, los **Objetivos Fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional** son:

1. Ejecutar las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad, dictadas por los Tribunales de justicia;
2. Reeducar al interno para su Reinserción Social;
3. Promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva del interno.

⁷ Aprobada el 11 de Septiembre del 2003 y publicada en La Gaceta No. 222 del 21 de Noviembre del 2003.

⁸ Arto. 183 Cn. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.

En base al Artículo 7 y siguientes de la Ley 473, los dos **Principios Fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional** son:

1. **El Respeto de los Derechos Humanos y la Dignidad Personal:** en ningún caso los internos serán sometidos a penas, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a cualquier tipo de maltrato físico o psicológico que atente contra la dignidad humana del interno⁹.
2. **El Principio de Igualdad:** no hay discriminación para los internos por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político o religioso, sexo, raza, edad, idioma, opinión, origen, estrato social y capacidad económica¹⁰.

Estos dos principios son confirmados, en el inciso 1 del Artículo 95 de esta misma Ley, como los primeros derechos de los privados de libertad.

El Reglamento de la Ley 473, en su Artículo 4, establece como otro principio general regulador de actividad penitenciaria el siguiente:

3. Ningún interno podrá ser obligado a realizar actividades penitenciarias a las que puede renunciar y que no contradicen sus deberes y obligaciones.

⁹ En este sentido, el Arto. 113 inciso 6 de la Ley 473, establece como uno de los principios que rigen la carrera penitenciaria, el respeto a los derechos humanos. De igual manera, el Arto. 118 de esta misma Ley, establece como una de las obligaciones del personal del sistema penitenciario: “**1.** Cumplir y respetar la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente Ley y su Reglamento, los tratados, convenios y acuerdos internacionales y demás disposiciones comprendidas dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense que regulen el trabajo penitenciario; **2.** Respetar la dignidad humana del privado de libertad, proteger y defender los derechos humanos de éstos...”. El Arto. 5 del Reglamento de la Ley 473 confirma este principio.

¹⁰ Este principio es confirmado por el Arto. 6 del Reglamento de la Ley 473.

2. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

El Sistema Penitenciario Nacional es una Dirección General Administrativa de carácter nacional, dirigida por el Ministerio de Gobernación, constituyéndose como un cuerpo armado organizado jerárquicamente, de naturaleza civil y no deliberante.

El artículo 14 numeral 2 de la Ley No 290, **Ley de Organización, Competencias y Procedimiento del Poder Ejecutivo**, expresa que le corresponde al **Ministerio de Gobernación** la coordinación, supervisión y dirección del Sistema Penitenciario Nacional. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley No 473, manifiesta que le corresponde al Ministro de Gobernación, coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional a través del Director General que al efecto nombre por medio de Acuerdo Ministerial.

La Dirección General del Sistema Penitenciario tiene su sede en la Ciudad de Managua, y según el Artículo 14 de la Ley 473 esta Dirección General está integrada por un **Director General**, dos **Subdirectores Generales** y un **Inspector General**. El Director General es el superior jerárquico y máxima autoridad del Sistema, a quien se le subordinan todos los demás funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario Nacional (Arto. 10 Reg. Ley 473.). Los otros órganos administrativos del Sistema Penitenciario son las **Especialidades Nacionales**, **Órganos Nacionales de Apoyo** y las **Direcciones de los Centros Penitenciarios** (Arto. 9 Reg.).

En base al Artículo 13 de la Ley 473, y resumiendo, las principales **Funciones de la Dirección del Sistema Penitenciario** son:

1. Ejecutar la **Política Penitenciaria** establecida por el Gobierno de la República, debiendo prestar estricto cumplimiento a la Constitución Política, a la Ley No 473

y su Reglamento, así como cualquier otra ley vinculada a la materia y los Acuerdos, Tratados y Convenios Internacionales y Resoluciones Ministeriales.

2. Administrar y controlar la **Actividad Penitenciaria**;
3. Velar por la vida, la integridad física y moral, así como la custodia y **Seguridad de los Internos**, así mismo garantizar la seguridad externa e interna de los centros penitenciarios;
4. Levantar y mantener actualizada la **Información Legal** relativa a los internos, así como facilitar el acceso a ésta cuando sea solicitada por las autoridades judiciales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Pro-Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional, la Policía Nacional y cualquier otro órgano competente del Estado, así como las diferentes organizaciones de Derechos Humanos jurídicamente establecidas en el país y los familiares de los internos o sus defensores.
5. Proponer las mejoras y reformas que considere necesario para el mejor funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como **Corregir las Irregularidades del Servicio Penitenciario**, de acuerdo a la Ley No 473 y su Reglamento y cualquier otro Reglamento específico que se establezca.
6. **Dictar Disposiciones**, instrucciones, circulares, manuales y reglamentos específicos, que garanticen el cumplimiento de la Ley 473 y su Reglamento¹¹.
7. **Solicitar la Intervención de la Policía Nacional**, en caso de alteraciones graves al orden interior, motines, fugas, secuestros y otros, para restablecer el orden en los Establecimientos Penitenciarios.

¹¹ Arto. 11 inciso 3 Reglamento Ley 473.

Los dos **Subdirectores Generales** y el **Inspector General** son los inmediatos y principales colaboradores del Director General en cualquier asunto inherente a la gestión del Sistema Penitenciario Nacional.

Las funciones de los **Subdirectores Generales**¹² son aquellas que les delegue el Director General del Sistema Penitenciario Nacional. El Artículo 12 del Reglamento de la Ley 473, establece como primera función de los Sub Directores es auxiliar al Director General en lo que se refiere al régimen y administración penitenciaria y en todos aquellos casos en que se deban tomar decisiones urgentes, comunicando de forma inmediata al Director General de las disposiciones que dictaren en cumplimiento de sus atribuciones. Según el Artículo 9 inciso 2 del Reglamento de la Ley 473, un subdirector debe atender el **Área Operativa** y el otro el **Área Administrativa**.

El **Inspector General** tiene la función de fiscalizar, inspeccionar e informar al Director General sobre las actuaciones de los funcionarios, empleados y demás personal del Sistema Penitenciario Nacional, el cumplimiento de las normativas penitenciarias, así como del cuidado del funcionamiento y prestigio de la Institución. También realiza propuestas y recomendaciones con relación a las medidas y sanciones disciplinarias que se les aplicaran a los miembros del Sistema Penitenciario Nacional que incurran en faltas o delitos.

El Artículo 18 de la Ley 473 crea el **Consejo de Dirección Nacional**, que es el Órgano de asesoría y consulta del Sistema Penitenciario Nacional, integrado por el Director General, los dos Subdirectores Generales, el Inspector General, los Directores de Especialidades Nacionales, los Directores de los Órganos de Apoyo y los Directores de los Establecimientos Penitenciarios del país.

¹² Artículo 128 Ley 473. “Los nombramientos en los cargos de los dos Subdirectores Generales y del Inspector General, a propuesta del Consejo de Dirección Nacional, es facultad exclusiva del Ministro de Gobernación...por un periodo igual al del Director General del Sistema, pudiéndose ratificar en el cargo hasta por un periodo más. El nombramiento de los otros cargos y la permanencia en los mismos es competencia de la Jefatura Nacional...”

El Artículo 19 de la Ley 473 crea el **Consejo Técnico del Sistema Penitenciario**, como órgano de asesoría del Director General, integrado por los Directores de Especialidades Nacionales y cualquiera de los otros jefes, que a criterio del Director General, sea considerado necesario designar para la integración y funcionamiento de éste.

Dentro del organigrama del Sistema Penitenciario Nacional tenemos a las **Direcciones de las Especialidades Nacionales** (Artos. 20 al 24 Ley 473), las cuales ejercen funciones rectoras de asesoría, definición de normativas generales de carácter nacional; teniendo la responsabilidad de la supervisión, control, análisis y evaluación de los diferentes programas que se desarrollen en el Sistema Penitenciario.

Las Direcciones de Especialidades Nacionales son las siguientes:

- 1. Dirección de Reeducción Penal;**
- 2. Dirección de Control Penal; y**
- 3. Dirección de Seguridad Penal.**

La Dirección de Reeducción Penal tiene la función de brindar asesoría, planificación, control y evaluación de los diferentes programas y actividades de rehabilitación social destinados a la reinserción del interno a las actividades productivas de su familia y la sociedad.

La Dirección de Control Penal tiene la función especial de asesorar, planificar, controlar y evaluar todo lo relativo al registro, control administrativo y estadístico de la situación jurídica de cada uno de los internos. El Director de éste órgano debe suministrar la información legal de los privados de libertad a las persona e instituciones públicas o privadas acreditadas que la soliciten (Arto. 51 Reg. Ley 473).

La Dirección de Seguridad Penal tiene la función controlar y evaluar las actividades y planes de seguridad de las instalaciones penitenciarias y el movimiento diario de los internos fuera (seguridad externa) o dentro de las instalaciones físicas del Establecimiento Penal.

En cada uno de los Establecimientos Penales existen Direcciones de Especialidades Penitenciarias, subordinadas a la **Dirección del Establecimiento Penal**, las cuales ejecutan las normativas penitenciarias en materia de rehabilitación, seguridad y control penal.

El Artículo 25 de la Ley 473 crea los **Órganos Nacionales de Apoyo**¹³, los cuales tienen la función de asesorar, asistir, capacitar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución, en beneficio de los privados de libertad y los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

Son Órganos Nacionales de Apoyo los siguientes:

- 1. División Administrativa Financiera;**
- 2. División de Personal;**
- 3. División de Información, Planificación y Estadística;**
- 4. División de Escuela para Estudios Penitenciarios;**
- 5. División de Asesoría Jurídica¹⁴;**

¹³ **Artículo 39 Reg. Ley 473:** “Los Jefes de las Especialidades y de los Órganos de Apoyo en los Centros Penitenciarios, se subordinan funcionalmente a la Especialidad Nacional y Órganos Nacionales de Apoyo y jerárquicamente al Director del Centro Penitenciario, el que a su vez se subordina al Director General”.

¹⁴ **Artículo 16 Reglamento Ley 473:** “Las funciones de la Asesoría Jurídica son: 2. Brindar, con

6. División de Auditoría Interna;

7. División de Servicios Médicos; y

8. División de Proyectos e Inversiones.

Además de estos ocho órganos nacionales de apoyo, tenemos al **Patronato Nacional de Privados de Libertad**, como un organismo de apoyo de la Dirección del Sistema Penitenciario, con el objetivo de promover programas y proyectos tendientes al beneficio económico y financiero de la Institución y para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y apoyar la reinserción social de éstos. Este Patronato es dirigido por una Junta Directiva, y se divide en **Patronatos Departamentales**.

Por otra parte tenemos al **Equipo Interdisciplinario** de cada Establecimiento Penitenciario, como una estructura orgánica con criterio técnico y autonomía funcional, que tiene como funciones la ubicación, clasificación, tratamiento, progresión, prórroga y regresión en régimen de los privados de libertad, así como la aplicación de sanciones disciplinarias (Arto. 143 y 144 Reg). Las funciones especiales del Equipo Interdisciplinario son:

1. Determinar la ubicación física de los ingresados en el Establecimiento Penal y el tratamiento a aplicar.

aprobación del Director General, asistencia legal a los funcionarios penitenciarios, que en el cumplimiento del deber, se vean involucrados en procesos judiciales. 3. Autenticar los Convenios, contratos u otras diligencias. 4. Asesorara la Dirección General en juicios, comparendos y citaciones. 5. Participar en la formulación, elaboración de propuestas de normas legales, reglamentarias, administrativas, vinculadas al ámbito de competencia del Sistema Penitenciario Nacional y que deberán ser presentadas a la Dirección General”.

2. Dar seguimiento y analizar el tratamiento brindado, individual y colectivamente a la población penal condenada.
3. Realizar estudios y presentar propuestas orientadas al trabajo penitenciario y de tratamiento.

Ahora, el personal del Sistema Penitenciario se clasifica en **Personal Penitenciario** y **Personal Administrativo** y su jerarquía está determinada por la denominación del cargo que ocupe (Arto. 197 Reg). En este sentido las **Denominaciones** establecidas son:

1. **Prefecto.**
2. **Subprefecto.**
3. **Alcaide.**
4. **Subalcaide.**
5. **Primer Alguacil**
6. **Alguacil**
7. **Sub Alguacil.**
8. **Agente.**

En principio, corresponde al Director General del Sistema Penitenciario Nacional la denominación de Prefecto y a los dos Subdirectores Generales e Inspector General la denominación de Subprefecto. La denominación de Alcaide recae sobre los Directores de Especialidades Nacionales, Directores de Establecimientos Penitenciarios y Directores de Órganos Nacionales de Apoyo; en los casos de los Subdirectores de las respectivas estructuras se les denominan Subalcaide. A los cargos de Jefe de Departamento u Oficina se les denomina Primer Alguacil; los Jefes de Sección y Unidades son denominados como Alguacil y en los casos de los Oficiales, se les denomina Sub Alguacil. Al personal base del Sistema Penitenciario Nacional se le denomina Agentes.

El Director General, los Sub-Directores Generales y el Inspector General del Sistema Penitenciario Nacional serán nombrados por el Ministro de Gobernación mediante Acuerdo Ministerial, por un período de cinco años, no prorrogables para el Director General, pero sí, por un período más, para los Subdirectores e Inspector. Los Directores de las Especialidades Nacionales, de los Órganos Nacionales de Apoyo y los Directores y Sub- Directores de los Establecimientos Penitenciarios serán nombrados por el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, por tres años prorrogables por un período más (Arto. 200 Reg). Los jefes de Departamentos, Oficina, Sección, Unidad, Oficiales y personal de base, serán nombrados por el Director General del Sistema Penitenciario, a propuesta de los jefes superiores respectivos, por un período de tres años prorrogables por un período más, excepto los oficiales que serán nombrados por dos años prorrogables (Arto. 201 y 214 Reg).

Para finalizar este apartado me toca decir que la llamada **Jefatura Nacional del Sistema Penitenciario** está integrada por el Director General, los dos Subdirectores Generales y el Inspector General, quienes en conjunto constituyen el nivel superior de mando de la Institución (Arto. 129 Ley 473).

3. LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Los Establecimientos Penitenciarios (llamados en nuestro Sistema **Centros Penitenciarios**) son locales administrativos y funcionales con organización jerárquica propia, integrados por un conjunto de ambientes para lograr una convivencia adecuada de los internos (Artos. 31 y 32 Ley 473).

Los Establecimientos Penitenciarios constituyen el marco real de la ejecución penitenciaria, el lugar donde se va a desarrollar la vida de los internos, sus actos regimentales, sus relaciones familiares, sus actividades de tratamiento, ocupacional, formativo, etc. En los Establecimientos Penitenciarios debe existir una ordenada convivencia, basada en el respeto de los derechos y las exigencias de los deberes de cada persona. Debe existir un sistema de vigilancia y seguridad que garantice la custodia de los internos.

En la actualidad el Sistema Penitenciario Nicaragüense cuenta con ocho Establecimientos Penitenciarios, los cuales tienen competencia territorial de ámbito regional, es decir, que cada uno de los Establecimientos Penitenciario ejerce su competencia en varios departamentos del país, dichos establecimientos son¹⁵:

Dirección Penitenciaria

1. Estelí
2. Chinandega
3. Tipitapa
4. Veracruz
5. Granada
6. Juigalpa
7. Matagalpa
8. Bluefields

Departamentos

Estelí, Nueva Segovia y Madriz
León y Chinandega
Managua
Managua (Mujeres)
Masaya, Rivas, Carazo y Granada
Boaco, Chontales, Río San Juan
Jinotega y Matagalpa
Región Autónoma del Atlántico Sur

¹⁵ Brenes Guevara, B. (2002). *El Sistema Progresivo del Régimen Penal en el Centro Penitenciario Tipitapa*, , Pág. 35.

Cada Establecimiento Penitenciario debe contar con ambientes y locales que faciliten la clasificación y separación de los internos. La clasificación de los Privados de Libertad en cada Establecimiento Penitenciario se efectúa atendiendo los criterios siguientes:

1. **Por situación legal:** Acusados y Condenados;
2. **Por sexo:** Masculino y Femenino.
3. **Por edad:** Adolescentes, entre 15 y 18 años no cumplidos, Jóvenes, entre 18 y 21 años y Adultos.
4. **Por patología física o psíquica**, que imposibilite su permanencia en el régimen común de la población penal;
5. **Por Régimen Penitenciario:** Adaptación, Laboral, Semi-abierto, Abierto; y Convivencia Familiar.

Los ambientes que deben existir en cada Establecimiento Penitenciario son:

1. Área de atención médica y psicológica;
2. Escuela, biblioteca e instalaciones deportivas y recreativas;
3. Dormitorios, baños, patios e instalaciones sanitarias;
4. Talleres y lugares para la actividad productiva;
5. Comedor, cocina, salones para visitas, así como área para los encuentros conyugales;
6. Cualquier otra instalación que resulte necesaria para el cumplimiento y ejecución de la pena, así como las actividades conexas del privado de libertad y de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.

Los locales para el alojamiento de los privados de libertad, así como aquellos en que donde se desarrolle la vida comunitaria de éstos, deben tener garantizados el espacio físico necesario, así como las **Instalaciones Higiénico Sanitarias** básicas para la satisfacción de las necesidades de éstos, el acondicionamiento para la circulación de aire suficiente, la iluminación natural y artificial de todas las áreas; condiciones se deben ajustar a los recursos materiales del Sistema Penitenciario y los factores climáticos del país (Arto. 34 Ley 473).

CAPÍTULO SEGUNDO:

RÉGIMEN, TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO NICARAGUENSE

En Nuestro país la **Reinserción Social** de los privados de libertad la establece expresamente nuestra Constitución Política en su artículo 39 que reza así: “En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo”.

En esta materia, el día 11 de Septiembre del año 2003, se aprobó la “**Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena**”, la cual señala en su **artículo 1** que su objeto es establecer las normativas y reglas generales para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y regular la actividad de éste en la ejecución de las penas y medidas cautelares privativas de libertad, tales como control, reeducación, seguridad penal, y la reinserción social de las personas privadas de libertad, además señala que la ejecución de la pena tiene como fin primordial la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad. Posteriormente fue aprobado el “**Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena**”, Decreto-Ley No 16-2004, que establece los procedimientos específicos de la actividad penitenciaria en materia de control, seguridad y reeducación de los privados de libertad.

La Ley 473 es una ley de orden público y tiene carácter general, ya que las normativas y reglas que ella establece son susceptibles de ser desarrolladas particularmente por otras normativas legales (Arto. 150 Ley 473). En este sentido, el Artículo 236 del Reglamento, establece que el Director General del Sistema Penitenciario dictará, con aprobación del Ministro de Gobernación, los Manuales de Procedimientos y normativas

administrativas para regular el funcionamiento y la actividad del Sistema Penitenciario Nacional, siendo éstos los siguientes:

1. Manual de Procedimiento de Control Penal.
2. Manual de Procedimiento de Seguridad Penal.
3. Manual de Procedimiento de Reeducción Penal.
4. Manual de Procedimiento de Orden Interior.
5. Normativas de Salud.

Estos manuales y cualquier otra disposición administrativa especial no deben ir en contra de lo establecido por la Ley 473 y su Reglamento (Arto. 238 Reg).

En **Manual de Reeducción Penal** debe regular la aplicación del tratamiento reeducativo a las personas privadas de libertad, y determinar la atención que se le debe de brindar a los familiares de éstos y a todas aquellas personas naturales y jurídicas que de una u otra forma se involucran en el quehacer penitenciario, este manual debe ser aplicado por la Dirección de Reeducción Penal del Sistema Penitenciario a través de sus departamentos, con el propósito de organizar, ejecutar, controlar y evaluar el tratamiento reeducativo.

El artículo 40 de la Ley 473 ordena que en cada Establecimiento Penitenciario deba existir un **Reglamento Interno**, autorizado por el Director General del Sistema Penitenciario, en donde se establezcan los derechos y obligaciones de los internos, las normativas disciplinarias existentes y los procedimientos para formular peticiones y quejas. Este reglamento debe dársele a conocer al interno desde el momento de su ingreso al establecimiento.

En el **ámbito internacional**, la Reinserción Social de los Privados de Libertad se reconoce en varios cuerpos normativos, entre ellos tenemos lo establecido en el **artículo 10 inciso 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1996**, señalando que: *“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.* Los menores

delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Y la **Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969** que manifiesta en su **artículo 5 inciso 6** que: *“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”*.

Así mismo, las **“Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”**, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1955) y por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante resolución 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957, establece una serie de regulaciones y normas que deben ser atendidas por los Estados miembros e incorporadas en sus respectivas legislaciones, para brindar una amplia y eficaz protección a las personas detenidas por cualquier motivo en todo tipo de circunstancias de tiempo y lugar. El objeto de tales reglas no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. En relación a la reinserción social de los privados de libertad este instrumento establece que:

- El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.
- Para lograr este propósito la Administración Penitenciaria debe emplear, conforme a las necesidades del tratamiento individual de los privados, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.
- La reinserción a la sociedad no termina con la liberación del recluso, el Estado deberá disponer de organismos de ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.

En nuestro ordenamiento jurídico estos tratados internacionales se encuentran reconocidos en el **Código Procesal Penal, Ley No 406**, en su artículo 402 que dice: *“El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultades que le otorgan la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Nicaragua, las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos, y planteará ante el tribunal que corresponda las observaciones, recursos e incidencias que con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes”*.

Además tenemos el **Código de la Niñez y la Adolescencia**¹⁶ que habla sobre la Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de los menores privados de libertad, y en su artículo 209 establece que, durante la ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes, por la comisión infracciones penales, se deberá fomentar las acciones necesarias que le permitan al adolescente su permanente desarrollo personal y la Reinserción a su familia y a la Sociedad.

¹⁶ La Ley # 287, “Código de la Niñez y la Adolescencia”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 97, del 27 de mayo de 1998

2. EL EXPEDIENTE PENITENCIARIO

El Sistema Penitenciario necesita, para **la recepción** de los declarados como privados de libertad en los Establecimientos Penitenciarios, la orden judicial emitida por medio de auto o en la sentencia condenatoria, que declare la prisión al reo y la remisión a determinado Establecimiento Penitenciario (Arto. 36 Ley 473). Además, como requisito especial y según el Reglamento a la Ley 473, el reo debe ir formalmente remitido por el jefe policial de la estación donde se encontraba detenido, acompañando sus antecedentes policiales, además de haber sido remitido con anterioridad al Instituto de Medicina Legal, siempre que el reo padezca alguna enfermedad crónica, presenten lesiones o este embarazada, debiendo presentar el Dictamen Médico Legal correspondiente. El Director del Establecimiento Penitenciario respectivo podrá **denegar el ingreso del reo** en caso de no reunir alguno de estos requisitos señalados (Arto. 54 Reg).

El ingreso de cada privado de libertad (sea condenado o sometido a medida cautelar), debe anotarse en un **Libro de Ingreso**, sellado y foliado por el Director del Establecimiento Penal (Arto. 52 Reg. Ley 473). El reo ingresado debe ser valorado por una **Comisión de Ingreso del Centro Penal** integrada por oficiales de Control Penal, Reeducción Penal, el médico o enfermero y un psicólogo del Establecimiento (Arto. 58 Reg).

Luego de su formal ingreso, al privado se le abre un **Expediente Penitenciario** (Arto. 37 Ley 473 y 59 y 60 del Reglamento), en donde se expresa toda la información relativa a su situación procesal y penitenciaria. Este expediente debe contener el nombre y la identificación ciudadana y civil de éste, la causa judicial por las que se encuentra guardando prisión, la resolución que decreta la prisión, todas las diligencias penales, procesales y penitenciarias que, sucesivamente, se practiquen sobre el interno, y como medio de seguridad deberán registrarse las huellas dactilares y fotografía del interno. El estado de las causas judiciales y los cambios de situación legal de los privados de libertad se deben registrar en los **Libros Auxiliares del Centro**

Penal (Arto. 66 Reg.), debe registrarse también el **egreso**¹⁷ de los privados del Centro Penal en un Libro Especial de Egresos (Arto. 69 Reg).

¹⁷ **Artículo 67 Reg.- Egresos.** Se considera egreso, a la baja física y estadística que altera la población penal en los Centros Penitenciarios, por motivo de libertad ordenada por juez penal competente, fuga, fallecimiento, amnistía e indulto.

3. DIFERENCIA ENTRE EL REGIMEN PENITENCIARIO Y EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

El trabajo realizado por las autoridades del Sistema penitenciario Nacional en materia de ejecución de las penas y medidas cautelares privativas de libertad lo podemos dividir en dos grandes áreas, el área o **Trabajo Regimental Penitenciario** y el **Tratamiento Penitenciario**, la primera constituye la actividad encaminada a conseguir una convivencia ordenada en el establecimiento penitenciario, determinando los derechos y las prestaciones que corresponden a los reclusos en general, y el tratamiento penitenciario es la actividad encaminada a conseguir la finalidad principal de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social¹⁸.

El **Régimen Penitenciario** es, en base al Artículo 52 de la Ley 473, un conjunto de normativas legales, reglamentarias y administrativas, que regulan la convivencia, la disciplina y el orden de los privados de libertad en los Establecimientos Penitenciarios, con la finalidad de crear el ambiente adecuado para el alcance de los fines y objetivos del Sistema Penitenciario Nacional.

El **Tratamiento Penitenciario** es *"una ayuda basada en las ciencias de la conducta, voluntariamente aceptada por el penado para que adquiriera la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal"*. Si damos una versión psicosocial a este fin legal, nos encontramos con que la ayuda será *"... para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales y sociales que hayan podido provocar o facilitar su delincuencia"*¹⁹. En la práctica el **Tratamiento Penitenciario** consiste en un conjunto

¹⁸ Nistal Burón, J. (s.f.). *El Régimen Penitenciario: Diferencias Por Su Objeto*, (s. n.).

¹⁹ ALARCÓN BRAVO, Jesús: "CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: EFECTIVIDAD MATERIAL." Ponencia. Serie: *Pena*; Consejo General del Poder Judicial De España.

de actividades y oportunidades que se le otorgan al interno, dándoles participación activa en la educación formal e informal, enseñanza y capacitación de un oficio, así como la participación en las actividades laborales, culturales y deportivas, o de aquellas otras actuaciones específicas que se puedan diseñar encaminadas a la reinserción en la sociedad del interno. Los familiares de los internos y la sociedad civil pueden participar en la aplicación del tratamiento penitenciario (Artos. 66 a 68 y 95 inc. 12 Ley 473).

Algunos autores, como el tratadista ALARCÓN BRAVO²⁰, añaden una tercera área en el ámbito penitenciario, la que denominan **Prestación Penitenciaria**, distinta del Régimen y del Tratamiento, configurada por aquellas prestaciones que la Administración penitenciaria ha de proporcionar a los internos por su condición de personas, entre estas prestaciones tenemos la asistencia sanitaria, la educación, la alimentación, el vestido, el trabajo, etc.

A pesar de esta diferenciación de la actividad penitenciaria, no puede existir una sin la otra, no puede haber un Tratamiento Penitenciario efectivo resocializador sin un Régimen Penitenciario que tome en cuenta la finalidad de las Penas Privativas de Libertad, y de la misma manera un Régimen Penitenciario que no coordine con los principios del Tratamiento Penitenciario, nunca logrará hacer efectiva la finalidad de las penas, o sea la Reinserción Social. El **Régimen Penitenciario** de los internos se constituye como un medio para obtener un fin, que no es otro que el del **Tratamiento Penitenciario**, o sea el de lograr la reeducación y reinserción social de los privados de libertad. El Tratamiento Penitenciario es el fin y el Régimen Penitenciario el medio.

En síntesis, las actividades propias del **Tratamiento Penitenciario** son:

- Clasificación.

²⁰ Cabo del Rosal, M. (dir.). (1986). *Comentarios a la Legislación Penal: Ley Orgánica General Penitenciaria*, (s. n.).

- Tratamiento.
- Permisos de Salida.

Las actividades propias del **Régimen Penitenciario** son:

- Seguridad y Vigilancia. Conducciones y Traslados.
- Régimen de los Establecimientos Penitenciarios.
- Régimen Disciplinario.
- Comunicaciones, Visitas y Recepción de paquetes.
- Información, Quejas y Recursos.
- Participación de los internos en las actividades del establecimiento, etc.

Las **Prestaciones de la Administración Penitenciaria** son:

- Trabajo Penitenciario.
- Instrucción y Educación.
- Asistencia Religiosa.
- Asistencia Sanitaria e Higiénica.
- Alimentación.
- Vestuario, equipos y utensilios.
- Adquisición voluntaria de artículos autorizados.

4. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO DE LOS PRIVADOS PREVENTIVAMENTE DE LIBERTAD

Por otra parte el **Régimen Penitenciario** de los **Privados Preventivos**, tiene como objeto, no la Reinserción Social sino la simple retención y custodia de estos internos para garantizar su presencia durante el juicio y la eventual ejecución de la pena impuesta en caso de ser condenados, sin olvidar que el interno preventivo debe de estar protegido por el principio de la presunción de inocencia mientras no sean condenados.

Es por este objetivo especial que para los internos preventivos no existe un Tratamiento Penitenciario, y por lo tanto su Régimen Penitenciario no lo abordaremos en este trabajo, y cuando haga mención al Régimen Penitenciario, lo haré en sentido propio, o sea para los internos condenados. En este sentido los privados preventivamente de libertad gozan de los mismos derechos establecidos en la Ley 473 y su Reglamento para los internos condenados, excepto los beneficios del Tratamiento Penitenciario en el Sistema Progresivo (Arto. 152 Reg).

Algo curioso es lo que establece el artículo 7 del Reglamento de la Ley 473 que dice *“En lo posible, por su condición procesal, los internos en prisión preventiva, en cualquiera de sus modalidades, podrán acceder a las actividades sociolaborales, educativas, formativas, deportivas y culturales que en sentido general se realicen en los Centros Penitenciarios, en igualdad de condiciones que los formalmente sentenciados por resolución judicial firme”*.

Debemos entender esta afirmación normativa en el sentido de que, si bien tienen derecho a participar en estas actividades, para ellos no tienen un carácter resocializador, formal y propiamente hablando, ya que ellos están cobijados bajo el principio de Presunción de Inocencia, ellos en principio no son culpables, no son criminales, no necesitan reinsertarse a la sociedad.

5. CLASIFICACIÓN DEL REGIMEN PENITENCIARIO

El Régimen Penitenciario está regido por el **Principio de Legalidad**, y la Administración Penitenciaria (entiéndase Sistema Penitenciario Nacional) debe actuar dentro de las normas penitenciarias fijadas en la Ley 473 más su Reglamento y las disposiciones reglamentarias internas. El control del cumplimiento del Principio de Legalidad por parte de la Administración Penitenciaria lo hacen los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, quienes tienen una doble función, en primer lugar hacer cumplir la pena impuesta y por otra parte amparar a los internos en sus derechos e intereses, frente a la Administración Penitenciaria. Los Regímenes Penitenciarios establecidos en nuestra Legislación Penitenciaria son:

A) Régimen de Adaptación

Es el régimen menos beneficioso para el privado de libertad, aquí son ubicados los internos implicados en fugas, motines y cualquier hecho de violencia y los que hayan regresado del Régimen Laboral. Los internos ubicados en este régimen deberán ser evaluados por el equipo interdisciplinario de establecimiento penitenciario, en un periodo máximo de seis meses, pudiendo realizarse dicha evaluación antes de cumplirse este período. En este Régimen los privados permanecen dentro de sus celdas bajo un estricto control y vigilancia, con participación limitada en todas las diferentes actividades artísticas y recreativas del establecimiento (Arto. 110 Reg).

En caso de **Inadaptación Extrema y Alta Peligrosidad** de los privados de libertad, el Director del Establecimiento Penitenciario podrá ordenar el traslado de los mismos a un contingente de seguridad máxima dentro o fuera del Establecimiento Penitenciario (Arto. 63 Ley 473).

B) Régimen Laboral

Serán ubicados en este régimen aquellos internos que voluntariamente hayan aceptado el tratamiento reeducativo y hayan solicitado la integración en las actividades del penal.

Los internos permanecen en galerías y celdas sin candado desde las 8:00 hrs. hasta las 21:00 hrs., de acuerdo a las condiciones físicas del penal, salvo casos excepcionales (Arto. 111 Reg).

C) Régimen Semiabierto

A este régimen ingresan los internos que progresan del régimen laboral y los que regresan del régimen abierto, ubicándolo en áreas internas o externas del establecimiento penitenciario bajo condiciones mínimas de seguridad, según el grado de confianza que las autoridades del establecimiento penitenciario tengan en el interno. Además el Arto. 112 del Reglamento de la Ley 473, establece que en este régimen serán ingresados los privados de libertad condenados por delitos menos graves y que demuestren buena conducta.

D) Régimen Abierto

En este régimen se ubican a los internos que progresen del régimen semiabierto y los que regresan del régimen de convivencia familiar, en este régimen no hay controles rígidos contra el interno y, por el contrario, hay una autorregulación de la disciplina por parte de éstos, siendo ubicado en áreas externas al perímetro del Establecimiento Penitenciario, hay posibilidades de actividades laborales externas o trabajos eventuales en el exterior del Establecimiento Penitenciario, y otras actividades de carácter educativas o formativas, culturales o cualquier otra, que permitan preparar a los privados de libertad o internos para su reinserción en la sociedad.

E) Régimen de Convivencia Familiar

A este régimen ingresan los internos que progresan del régimen abierto, los privados de libertad conviven en el exterior del Establecimiento Penitenciario junto a su familia de origen o adquirida; pueden ser beneficiados con éste régimen los internos que carezcan de antecedentes penales. La incorporación a este Régimen es a propuesta del Director del Establecimiento Penitenciario, quien debe coordinar con el juez ejecutor de la pena, en base a los criterios y las recomendaciones del Equipo Interdisciplinario,

debiendo informar su propuesta al Director de Reeducción Penal Nacional para su revisión, sin embargo el Arto. 115 del Reglamento establece que la convivencia familiar al final quien la aprueba es el Director General del Sistema Penitenciario Nacional. El Departamento de Reeducción Penal es la autoridad que controla el cumplimiento de las condiciones de este régimen.

El Arto. 119 del Reglamento establece que las **mujeres privadas de libertad en estado prenatal o postnatal** deben ser ingresadas en locales dentro del Establecimiento Penitenciario adaptados a su condición, si dentro del establecimiento no existen tales locales adaptados, se le tramitará ante el Juez competente la Convivencia Familiar hasta por dos años (Arto. 33 Ley 473). Con este mismo tratamiento serán beneficiados los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, previa valoración del médico forense (Arto. 120 Reg y 95 inc. 18 Ley).

En base al Arto. 116 del Reglamento, el beneficiado con el régimen de convivencia familiar debe cumplir las siguientes obligaciones para no regresarlo de régimen:

1. Mantener el respaldo del familiar que tutela oficialmente su estadía en este Régimen;
2. Reportarse al establecimiento penitenciario correspondiente cada mes o cada dos meses, dependiendo de la distancia;
3. Reportar al establecimiento penitenciario el cambio de domicilio o trabajo;
4. No concurrir a lugares de expendios de bebidas alcohólicas, casas de juegos, no participar en juegos de azar, abstenerse de transitar por lugares que estén restringidos por la sentencia, asimismo no provocar hechos que alteren el orden público ni violencia intrafamiliar;

5. No salir del país, ni del departamento donde radica su domicilio. Si por razones de trabajo tiene que movilizarse, debe comunicar esto al establecimiento penitenciario correspondiente, a fin de que le otorgue permiso.

6. APLICACIÓN DEL SISTEMA PROGRESIVO

La ejecución penitenciaria se basa en el **Sistema Progresivo** de seguimiento, atención y valoración particular a cada interno para determinar el Régimen Penitenciario en que debe ser ubicado, en base a su comportamiento y conducta social. Los privados de libertad preventivamente y los adolescentes privados²¹ no forman parte del sistema progresivo penitenciario (Arto. 104 y 105 Reg.).

Dentro del Sistema Penitenciario hay una **Dirección de Reeducción Penal**, y su función, como es obvio, es la rehabilitación social de los internos, con el fin de lograr la reinserción de éstos a la sociedad. El Director Nacional de Reeducción Penal debe garantizar el cumplimiento de las prerrogativas establecidas para cada una de las fases del sistema progresivo; controlar la aplicación de los regímenes del Sistema Progresivo; garantizar el respeto a los derechos de los internos y el cumplimiento de las obligaciones o deberes por parte de éstos; velar por la adecuada aplicación de las medidas restrictivas y sanciones a los internos (Arto. 100 Reg.).

En el proceso de reeducación de cada interno debe tenerse en cuenta la participación de éste en actividades educativas, deportivas, socio-laborales, recreativas y artísticas, que contribuyan a su estabilidad y desarrollo físico, psíquico y emocional, desarrollar actividades que involucren la participación del núcleo familiar del interno, la comunidad y las asociaciones civiles y religiosas.

La autoridad que decide la ubicación, permanencia, progresión o regresión de un interno a un determinado régimen es el **Equipo Interdisciplinario** de cada Establecimiento Penal, integrado por el Director del Establecimiento Penitenciario, quien lo preside, por el Director de Reeducción, por psicólogos, trabajadores sociales,

²¹ Los adolescentes privados deben someterse al **plan individual** establecido por el Sistema Penitenciario, el cual será controlado y supervisado por la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las sanciones penales a los adolescentes.

sociólogos y médicos del Establecimiento Penitenciario. El Equipo Interdisciplinario realiza una evaluación de la conducta del interno que es presentada al Director del Establecimiento Penal para adopte o no las propuestas del Equipo (Arto. 121 Reg.).

Para documentar la situación penitenciaria en el ámbito de la reeducación penal, a cada interno condenado se le confeccionará una **Libreta de Control Individual**²², en donde se reflejarán los siguientes aspectos de su vida penitenciaria:

- Disciplina y conducta
- Integración al trabajo penitenciario
- Integración a la instrucción escolar, general y capacitación técnica
- Integración al arte, deporte y recreación
- Integración a las actividades religiosas
- Situación de salud
- Relación con su núcleo familiar
- Estímulos otorgados

En principio, la persona que ha sido condenado a pena privativa de libertad y remitido a un Establecimiento Penitenciario, ingresa al **Régimen Laboral**, sin embargo los condenados por delitos menos graves ingresarán al **Régimen Semiabierto** y los condenados a un año de prisión o menos permanecerán en este régimen toda su condena (Arto. 121 Reg).

El Artículo 122 del Reglamento de la Ley establece que el privado de libertad que ingresa al Sistema Progresivo y que quiere progresar, debe cumplir con un **Porcentaje de Permanencia Mínimo** en cada Régimen. Para conocer este porcentaje de

²² Ver formato en los Anexos.

permanencia, primero tenemos que clasificar a los internos en tres tipos según sus antecedentes penitenciarios:

Los Internos Primarios por la comisión de delitos menos graves, los cuales entrarán al régimen semiabierto y permanecerán en él el 35% de su condena, luego progresarán al régimen abierto por el 25% de su condena y por último pasan al régimen de convivencia familiar por el 40% restante de la condena.

Los Internos Primarios por la comisión de delitos graves entrarán al régimen laboral y permanecerán allí el 40% de su condena, el 20% en el régimen semiabierto, el 10% en el régimen abierto y en el régimen de convivencia familiar el 25% de su condena.

Los Internos Reincidentes penitenciarios ingresarán al régimen laboral por el 60% de su condena, en el régimen semiabierto 20%, en el régimen abierto 10%, en el régimen de convivencia familiar el otro 10% de la condena.

Los Internos Multireincidentes ingresarán al régimen laboral el 70% de la condena, en el régimen semiabierto el 20%, en el régimen abierto el restante 10% de la condena, no hay convivencia familiar para los internos multireincidentes.

La progresión de un régimen penitenciario a otro más beneficioso se da cuando el interno cumple con el plazo de permanencia antes descrito, y que además observe buena conducta, no tenga causas penales pendientes, no haya sido objeto de medidas correctivas o sanciones disciplinarias severas o muy severas en los últimos seis meses, y que tenga una participación activa en las diversas actividades reeducativas (Arto. 62 Ley 473 y 123 Reg.); todos estos factores deben ser valorados por el Equipo Interdisciplinario.

Los internos mayores de sesenta años, que por prescripción médica no deban trabajar, los que tengan problema de discapacidad permanente, las mujeres embarazadas, estén exceptuados de trabajar y esta condición no afectará su progresión en régimen (Arto.124 Reg.).

El Equipo Interdisciplinario está en la obligación de valorar a todos los internos individualmente para su posible progresión (Arto. 150 inc. 7 Reg). Cuando el Equipo Interdisciplinario valore que no es conveniente la progresión del interno y que debe permanecer en un régimen determinado, el interno deberá ser valorado nuevamente, por este Equipo, dentro de tres a seis meses posteriores a dicha valoración (Arto 125 Reg).

La Regresión del privado de libertad a un régimen inmediato inferior se hará efectiva por orden del Director del Establecimiento a propuesta del Equipo Interdisciplinario, cuando éste cometa un nuevo delito; cuando se negare de manera reiterada y manifiesta a cumplir las normas propias de su régimen, o cuando se vean implicados en fugas, motines o cualquier tipo de violencia o intento de estos (Arto. 64 Ley). La regresión del régimen de convivencia familiar debe ser ordenada por el Director del Sistema Penitenciario Nacional a propuesta del Director del Establecimiento Penal encargado de la ejecución de la pena del beneficiado (Arto. 139 Reg).

Es el Equipo Interdisciplinario el que debe determinar la conveniencia de la regresión, valorando los hechos, circunstancias y factores que intervinieron en cada caso concreto, debiendo ubicar al interno en el régimen que corresponda, inclusive en unidades de máxima seguridad si resultase necesario, sin perjuicio de lo que en última instancia decida el juez de ejecución de la pena (Arto. 64 Ley 473).

7. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

Los internos para mantener un record de buena conducta deben cumplir con una serie de **Obligaciones y Prohibiciones Penitenciarias** impuestas por el Artículo 96 de la Ley 473, y es obligación de la Administración Penitenciaria darle a conocer al interno, desde el momento de su ingreso al Establecimiento, todas las normativas y disposiciones disciplinarias (Arto. 102 Reg.).

El conjunto de normativas que regulan la aplicación de de estas disposiciones disciplinarias y la forma de sancionar su incumplimiento constituye el **Régimen Disciplinario**, el cual está orientado a garantizar la Seguridad y la Convivencia Ordenada de los internos entre sí y con las autoridades del Establecimiento y las personas que ingresan al Establecimiento (Arto. 103 Ley 473).

Las **Obligaciones Penitenciarias** de los internos más importantes son:

1. **Permanecer en el Establecimiento** a disposición hasta su debida liberación o cumplimiento de la condena;
2. **Cumplir con las normas de régimen interior** y con las disposiciones orientadas por los funcionarios penitenciarios, así como las medidas restrictivas y sanciones que se le impongan;
3. **Respetar a las Autoridades Penitenciarias**, a lo otros internos y los visitantes;
5. **Cuidar del aseo e higiene** personal, así como de las instalaciones del establecimiento penitenciario; realizar labores de limpieza y saneamiento de las instalaciones del Establecimiento penitenciario, así como de sus artículos personales;

7. Participar en las actividades formativas, educativas, laborales, sociales deportivas y culturales que se definan como necesarias para el desarrollo de sus capacidades y habilidades; y

8. Cualquier otra que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Por su parte el artículo 153 del Reglamento de la Ley 473 establece las siguientes obligaciones para los internos:

1. Cuidar las instalaciones físicas del Establecimiento Penitenciario;

2. Asistir a las visitas programadas en orden;

3. Permanecer disciplinadamente en el área designada para las distintas actividades que se desarrollen, según lo dispuesto por las autoridades del Establecimiento Penitenciario;

4. Cumplir y regirse por el horario establecido por el Establecimiento Penitenciario, en la realización de todas y cada una de las labores ordinarias y extraordinarias del penal.

El Arto. 154 del Reglamento establece las siguientes **prohibiciones** para los internos:

1. Participar en riñas y agresión a funcionarios, interno, y personas que visitan el Establecimiento.

2. Inducir o participar en desórdenes, motines, disturbios, planes de fuga, o inducir a huelgas de hambre.

3. Tener o confeccionar armas de fuego, armas blancas, cortantes, punzantes, lacerantes o contundentes.

4. Elaborar, poseer, traficar, almacenar, introducir, o ingerir bebidas espirituosas, lo mismo que estupefacientes, psicotrópicas y otras sustancias controladas. Esta misma prohibición es extensiva a los medicamentos que no estén registrados para su tratamiento por prescripción médica, la cual será controlada por los servicios médicos del centro penitenciario.
5. Vender, comprar o cambiar artículos u objetos.
6. Poseer dinero y objetos de metales preciosos.
7. Pegar en las paredes, ventanas y puertas, impresos, fotos, sabanas, toallas, o cualquier otro material que obstaculice la visibilidad e inspección en las celdas.
8. Poseer teléfonos móviles, cámaras fotográficas y de vídeo, computadoras, buscadores de personas, grabadoras y medios técnicos de comunicación de cualquier naturaleza; así como, todos aquellos objetos que a criterio del Director General del Sistema Penitenciario, vulneren la seguridad interna en los centros penitenciarios.
9. Usar aretes, realizar tatuajes, así mismo o a otros internos.
10. Irrespetar el toque de silencio.
11. Dirigirse de forma inadecuada a las autoridades penitenciarias, visitantes e internos.
12. Sostener relaciones homosexuales.
13. Mantener relaciones heterosexuales sin autorización previa.
14. Lavar o limpiar pertenencias de otros internos.

En caso de **Incumplimiento de sus Obligaciones y Prohibiciones Penitenciarias** los internos pueden ser sancionados disciplinariamente, conforme al Régimen Disciplinario de cada Establecimiento y de forma proporcional a la falta cometida. El interno tiene derecho a no ser corregido, sino en los casos establecidos legal o reglamentariamente y con las sanciones previstas de la misma manera. En todo caso el interno debe ser informado de la infracción que se le atribuye y de la sanción correspondiente (Arto. 150 inc. 9 Reg).

En base al Artículo 155 del Reglamento de la Ley 473 se considera **Infracción Penitenciaria**, aquel acto provocado u omitido por el interno, que contravengan las Prohibiciones y Obligaciones previamente establecidas en la Ley 473 y su Reglamento y los Manuales de Procedimientos de Reeducción Penal, Orden Interior y Seguridad Penal, dadas a conocer oficialmente. Las faltas o infracciones penitenciarias pueden ser leves, graves o muy graves.

Son **Infracciones Leves** (Arto. 156 Reg):

1. Alterar el orden sin consecuencia para el normal desarrollo de las actividades reeducativas, distribución de alimentos y sesiones al sol.
2. Alterar la formación u orden establecido al ser conducido dentro o fuera del penal.
3. Organizar, promover o participar en juegos de azar.
4. Poseer, hacer circular dinero y objetos de metales preciosos.
5. Desarrollar apuestas en eventos deportivos o recreativos.
6. Vender, comprar o cambiar artículos u objetos.
7. Mantener medicamentos sin la debida prescripción y control médico del Centro Penitenciario.
8. Tener libros, revistas o cualquier material que induzca a la violencia o material bibliográfico de carácter pornográfico.

9. Pegar en las paredes, ventanas y puertas, impresos, fotos, sábanas, toallas, o cualquier otro material que obstaculice la visibilidad e inspección en las celdas.
10. Lavar o limpiar pertenencias de otros reclusos.
11. Usar aretes, realizar tatuajes a sí mismo o a otros internos.
12. Dirigirse a las autoridades penitenciarias, visitantes y otros internos de manera inadecuada.
13. No mantener en condiciones higiénicas y orden las celdas y el área de trabajo.
14. Incumplir las disposiciones establecidas para los recuentos, cotejamiento físico, registro personal, requisas y otros tipos de controles.

Son **Infracciones Graves** (Arto. 157 Reg):

1. Elaborar, poseer, traficar, almacenar, introducir o ingerir bebidas espirituosas.
2. Comunicarse telefónicamente sin autorización.
3. Dejar de asistir injustificadamente a las actividades laborales, de instrucción escolar o de capacitación técnica a las cuales se haya integrado voluntariamente.
4. Agredir verbal o físicamente a internos, funcionarios o visitantes, sin que dicha acción constituya falta penal.
5. Atentar contra las autoridades penitenciarias, visitantes e internos, con claros propósito de causarles daño.
6. Participar en riña, sin que las consecuencias se consideren falta penal.
7. Hurtar pertenencias de internos o bienes asignados cuando no constituyan falta penal.
8. Destrucción dolosa de bienes puestos a su disposición, propiedad del centro penitenciario.
9. Resistencia pasiva ante la orden de los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Son **Infracciones Muy Graves** (Arto. 158 Reg):

1. Resistencia pasiva o activa ante las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones.
2. Introducción, posesión, almacenamiento, tráfico, trasiego y consumo de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas.
3. Elaboración y tenencia de armas de fuego, armas blancas, cortantes, punzantes, lacerantes y contundentes.
4. Intentos de fugas y fugas frustradas.
5. Instar al desacato de órdenes de las autoridades penitenciarias.
6. Intimidar y agredir a otros internos con el fin de imponer supremacía de grupo (pandilla o banda).
7. Inducir a participar en huelga de hambre, amotinamiento y disturbios.
8. Intento de secuestro a autoridades penitenciarias y civiles.
9. Agresión física a las autoridades penitenciarias o visitantes con consecuencia que constituyan falta penal o delito.
10. Agresión física entre internos con consecuencias que constituyan falta penal o delitos.
11. Participaren riña tumultuaria.
12. Hurto agravado por violencia o intimidación de pertenencias de internos o bienes asignados que se cometan en grupo.

El **Equipo Interdisciplinario** del Establecimiento Penitenciario es el órgano encargado para aplicar el Régimen Disciplinario y establecer las **Sanciones Disciplinarias**²³ (Arto. 143 y 149 Reg). Este Régimen Disciplinario debe aplicarse con una finalidad resocializadora, evitando la aplicación de Sanciones Disciplinarias que puedan resultar más perjudiciales que beneficiosas.

²³ Las **Sanciones Disciplinarias** son las medidas que se aplican a los internos por la comisión de una infracción penitenciaria (Arto. 160 y 161 Reg.).

Las **Sanciones Disciplinarias** no deben atentar contra la Integridad Física y Psíquica del interno ni contra su Dignidad Personal (Arto. 106 Ley 473); sin embargo el Artículo 110 de esta Ley, permite la utilización de **Sanciones Disciplinarias Urgentes**, ordenadas por el Director del Establecimiento Penitenciario, para vencer la resistencia activa o pasiva de los privados de libertad ante las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo o para sofocar y abortar cualquier acto contrario al Orden y la Seguridad del Establecimiento. Pero debemos tener en cuenta que una de las obligaciones del personal del Sistema Penitenciario, en basa al Arto. 118, es hacer uso de la fuerza en aquellos casos, que por su naturaleza y agravante, resulte estrictamente necesario, medida que deberá de ser racional, proporcional a la causa que le de origen y que la situación lo requiera.

Además el Artículo 108 de esta misma Ley, establece la aplicación de **Medidas Cautelares** en caso de que se ponga en riesgo la Integridad Física y la Seguridad de los internos, su familia o el personal del Establecimiento y se aplicaran exclusivamente como forma de prevención y solución circunstancial y temporal ante situaciones de inminente peligro personal o institucional. Las medidas consisten en la ubicación del privado en unidades de máxima seguridad en el mismo o en diferente Establecimiento. Las Medidas Cautelares que se tomen deben ser razonadas y fundamentadas por escrito por parte del Director del Establecimiento, todo debe hacerse constar en el expediente del interno. Estas medidas no se deben de aplicar a las mujeres embarazadas, a las madres en proceso de lactancia de sus hijos, sino hasta doce meses después del parto o a las que tuviesen hijos consigo.

Las Sanciones Disciplinarias establecidas pueden ser leves, severas y muy severas:

Son **Sanciones Leves**:

1. Amonestación verbal: Privada, ante su contingente o ante su familia.
2. Amonestación escrita.
3. Suspensión de actividades recreativas, deportivas y artísticas, hasta por dos veces consecutivas.

4. Suspensión temporal del área de trabajo, que no exceda de diez días.

Son **Sanciones Severas**:

1. Suspensión de permisos, hasta por dos veces consecutivas.
2. Suspensión temporal del área laboral, hasta por seis meses.
3. Suspensión de actividades recreativas, deportivas y artísticas, hasta por seis veces.
4. Internamiento en celda bajo candado, hasta por 30 días.
5. Aplazamiento en progresión del Régimen de 3 a 6 meses.

Son **Sanciones Muy Severas**:

1. Suspensión de permisos, hasta por tres veces consecutivas.
2. Suspensión del área laboral de 6 meses a un año.
3. Regresión en régimen.
4. Internamiento en celda individual, hasta por 30 días.
5. Ubicarlo en contingente de seguridad, hasta por 6 meses.

Desarrollo especial merece la **Sanción de Internamiento en Celda**, esta sanción únicamente le será aplicada cuando en los hechos cometidos por el interno se aprecie la notoria y manifiesta agresividad y violencia o en los casos en que de forma reiterada y progresivamente, altere la convivencia en el Establecimiento Penitenciario o cuando se ponga en riesgo la seguridad interna del establecimiento o la vida del personal o de los demás internos. El internamiento se debe aplicar previa autorización escrita del Director del Establecimiento Penitenciario y después que el médico de éste examine al interno y que certifique que se encuentra en condiciones adecuadas de salud (Arto. 107 Ley 473). El médico del establecimiento esta obligado a visitar todos los días a los internos que están cumpliendo tales sanciones y posteriormente informar al Director del Establecimiento su estado de salud. Esta sanción no le será aplicada a las internas que se encuentren en proceso de gestación y las que se encuentren lactando, sino hasta

doce meses después del parto, también se excluyen a las que tuviesen a los hijos consigo.

Como dije, y según el Artículo 109 de la Ley 473, el interno tiene derecho a que se le informe sobre la Infracción Penitenciaria que se le atribuya y sobre la Sanción Disciplinaria a aplicar, para que pueda ejercer su derecho a la defensa, sin este requisito previo, el privado no puede ser sancionado.

El Director del Establecimiento, como presidente del Equipo Interdisciplinario, es el que ratifica o deniega la aplicación de las medidas correctivas a los internos. El interno sancionado puede pedir que se revise la medida correctiva aplicada. Además el sancionado puede recurrir contra la medida ante el Juez de Ejecución (Arto. 104 Ley 473).

En base al Arto. 162 del Reglamento el **Procedimiento para la Aplicación de las Sanciones Disciplinarias** es el siguiente:

1. El oficial de Reeducción Penal, al tener conocimiento de la Infracción Disciplinaria, elabora un reporte operativo y lo entrega al Jefe de Departamento de Reeducción Penal, quién a su vez lo presenta en el término de 48 horas al presidente del Equipo Interdisciplinario, o sea al Director del Establecimiento;
2. El Equipo Interdisciplinario informará al interno en un plazo de 24 horas después de haber recibido el informe de la infracción que se le atribuye y escuchará los argumentos en su defensa;
3. El Equipo Interdisciplinario valorará y determinará la sanción a aplicar, la que será expuesta al Director o Sub Director del Establecimiento, el cual la aprobará o denegará por escrito, en un plazo no mayor de tres días hábiles. Sin embargo, cuando se trate de sanciones leves que consistan en amonestación verbal, escrita o suspensión de actividades recreativas, deportivas y artísticas, se excluye este procedimiento, y la aplicación de las mismas le corresponde al Director del Establecimiento, al Jefe de Reeducción Penal o al Jefe de Sección o Galería.

4. En caso de flagrante falta penal, administrativa o delito, se tomarán medidas preventivas mientras el Equipo Interdisciplinario resuelve la medida a aplicar.

Toda Sanción Disciplinaria aplicada puede ser objeto de **Recurso de Revisión** ante el **Juez de Ejecución** competente (Arto. 337 CPP y Arto.162 Reg. Ley 473).

Sin perjuicio de recurrir de revisión ante el juez de ejecución, el interno sancionado puede recurrir administrativamente de revisión ante el Director del Establecimiento. La interposición del **Recurso de Revisión Administrativo** debe presentarse por escrito, por el propio interno o un familiar y dentro de las veinticuatro horas de ser notificada la sanción por el Equipo Interdisciplinario. El escrito continente del recurso de revisión se dirigirá al Director del Establecimiento, pero puede ser presentado ante el Jefe de Reeducción Penal, el Jefe de Sección o Galería o el Oficial de Contingente. En caso que sean los familiares los que interpongan el Recurso de Revisión Administrativo, será el Director del Establecimiento o a quién este designe, el que se encargará de recibir el mismo. Luego de recibido el escrito por el Director del Establecimiento, éste ratificará, reformará o revocará la sanción en un período no mayor de cinco días hábiles. La Sanción Disciplinaria no se ejecutará sin antes haberse resuelto la revisión, salvo por razones de seguridad o de flagrante falta penal, administrativa o delito (Arto. 164 Reg).

En caso de la comisión de un hecho que además de constituir Infracción Penitenciaria constituya también un **Delito**, el interno, además de aplicársele la Sanción Disciplinaria, podrá ser remitido a los tribunales de justicia para que sea procesado por la vía penal (Arto. 159 Reg).

7. EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

La Administración Penitenciaria debe organizar, en cada Establecimiento Penitenciario, un adecuado **Sistema de Vigilancia y Seguridad** que garantice la **Retención y Custodia** de los internos. Para que este Sistema de Vigilancia y Seguridad sea efectivo se requieren unos procedimientos regimentales apropiados, procedimientos que están determinados en la Ley 473, los Reglamentos y los Manuales Internos establecidos por la Administración Penitenciaria, y que estudiaremos a continuación.

En el caso específico del **Manual de Procedimientos de Seguridad Penal**, se establecen los procedimientos y mecanismos de seguridad penitenciaria, como por ejemplo el servicio de guardia, uso y empleo de la fuerza y armas de fuego, trabajo de interés preventivo, conducciones, traslados, técnica canina, entre otros (Arto. 98 Reg.).

En los Establecimiento Penitenciarios, para mantener la **Seguridad Penal**²⁴ y el orden interno, debe haber una observación directa de los privados de libertad, haciendo uso de medios técnicos y auxiliares, recuentos, registros personales, requisas 'y cotejamientos físicos de los mismos (Arto. 48 Ley 473).

El Departamento de Seguridad Penal y Orden Interior es el órgano que se encarga de la aplicación de las medidas y dispositivos de seguridad para regular el orden, la disciplina y la convivencia pacífica y ordenada de los privados de libertad en los Establecimientos Penitenciarios. El Jefe del Departamento de Seguridad Penal, dirige y ejecuta el cumplimiento de los planes operativos y de seguridad en las actividades internas de la población penal de acuerdo a lo establecido por el Equipo Interdisciplinario (Arto. 186 Reg), además debe elaborar y actualizar las **Tarjetas de Control Físico** de los privados de libertad (Arto. 194 Reg.). Este órgano, en la

²⁴**Artículo 78 Reg.- Seguridad penal.** La Seguridad Penal es el conjunto de medidas, actividades y dispositivos que se establecen, con el fin de garantizar las conducciones, traslados, la integridad física de los internos, así como el personal penitenciario y público que visitan los Centros Penitenciarios, la infraestructura y bienes del Estado a cargo del Sistema Penitenciario Nacional.

implementación de las medidas y dispositivos de seguridad, debe ser proporcional a la clasificación de la población penal por régimen, atendiendo al nivel de adaptación, el grado de peligrosidad y riesgos para la convivencia de los demás internos y personal penitenciario (Arto. 83 Reg.).

En cuanto a los **Traslados** de los internos de una Celda o Galería a otra y de un Establecimiento Penitenciario a otro, debemos conocer las siguientes reglas:

1. El Director del Establecimiento es la única autoridad que puede **ordenar el traslado de una celda o galería** a otra de un interno, además esta decisión debe estar debidamente motivada por escrito (Arto. 195 Reg).
2. Es competencia del Director General del Sistema Penitenciario, ordenar los **Traslados de un Establecimiento Penitenciario** a otro, a solicitud del interno, de su familia, por medidas de seguridad (Arto. 63 Reg). En este sentido debemos recordar que cuando esté en riesgo la integridad física y seguridad personal de un interno, el Director del Centro Penal está obligado a tomar las medidas preventivas pertinentes, ubicándolo en un local que garantice su protección o en otro centro penitenciario, sin perjuicio que continúe recibiendo las prerrogativas que le corresponde, según el régimen que pertenece (Arto. 126 Reg). Este **traslado se comunicará al Juez de Ejecución** de Sentencia quien podrá ratificar o revocar el traslado. De la misma manera deben ser comunicados sobre el traslado los familiares y allegados del interno.

Para el **traslado** del interno fuera del Centro Penal, como por ejemplo ante la autoridad judicial, a las clínicas u hospitales, el Director debe dar la **Orden de Conducción y Traslado**. Por motivos de seguridad, durante la conducción o traslado, el Director del Centro Penal podrá solicitar el auxilio de la Policía Nacional (Arto. 93 Reg. Ley 473). Los Directores de Centros Penitenciarios deben garantizar la presencia de los privados ante las autoridades judiciales en lugar y momento determinados, salvo causas justificadas, sin embargo es deber de estos informar a la autoridad competente el motivo por el cual no se presentó al interno.

En cuanto a los **Registros y Requisas**, se establece su aplicación de forma ordinaria una vez al mes (Arto. 190 Reg). Sin embargo pueden ordenarse los **registros y requisas extraordinariamente** o de forma especial, ya sea parcial o general (Arto. 189 Reg). El registro y la requisa se llevarán a cabo en los privados de libertad, sus ropas, pertenencias, celdas, ventanas, techos, paredes, áreas y espacios por donde circulan o permanecen éstos, para detectar y ocupar cualquier objeto prohibido. (Arto. 188 Reg). Para estos procedimientos se utilizarán los medios técnicos necesarios, como bastones eléctricos, detectores de metales, escudos, técnica canina, cámaras de circuito cerrado y otros que sean necesarios para garantizar la seguridad y la eficacia de los mismos, pero siempre respetando la dignidad de las personas, además todo registro y requisa debe ser hecho por funcionario del mismo sexo que el registrado, y debe llevarse a cabo siempre en presencia del registrado y se realizarán **actas de registro y ocupación**²⁵, las cuales serán firmadas por el interno o visitantes registrados, quienes recibirán una copia de la mismas (Arto. 42 Ley 473).

De la misma manera serán registrados los paquetes introducidos por los visitantes de los internos, todo con el fin de impedir la introducción y extracción de armas, municiones, explosivos, sustancia ilícitas o controladas y demás objetos prohibidos que pongan en peligro la seguridad interna y externa del centro penitenciario, de los privados de libertad, funcionarios penitenciarios y visitantes. Cuando se presuma que algún visitante pretende introducir o extraer armas, drogas o cualquier objeto prohibido, se procederá al registro y requisa personal, en cuyo caso, ésta se ejecutará por funcionarios del mismo sexo, debiendo prestársele el debido respeto a su dignidad humana.

Por motivos de seguridad, el **Ingreso al Establecimiento Penitenciaria** es restringido para personas externas, necesitando la autorización previa y expresa por el Director del

²⁵ En base al Artículo 193 del Reglamento de la Ley, en el Acta de Ocupación se expresará: 1. Fecha de ocupación. 2. Nombre del interno propietario del objeto. 3. Descripción, cantidad y estado en que se encuentra el objeto ocupado. 4. Autoridad ejecutora de la requisa. 5. Firma del interno. 6. Firma del familiar (una vez que reciba el objeto).

Centro para hacerlo. Nadie, sin autorización, puede cruzar el **área perimetral** del centro, el cual debe estar señalizado y ser visible, aquella persona que lo cruce sin autorización lo hará bajo su propio riesgo (Arto. 94 Reg). Los Directores de Centros Penitenciarios podrán restringir el acceso de representantes legales de los internos, autoridades judiciales y otros en caso de alteraciones graves al orden interior del establecimiento (Arto. 76 Reg).

Las autoridades del Establecimiento Penitenciario no podrán acceder armados al interior penal y áreas conexas en donde se movilicen privados de libertad, salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación de las instalaciones del centro penal (Arto. 85 Reg.). En base a los Artos. 27 de la Ley 473 y 88 de su Reglamento, los funcionarios del Sistema Penitenciario deberán hacer uso racional de la fuerza, y en base al Arto. 89 del Reglamento las autoridades penitenciarias podrán utilizar racional y proporcionalmente sus armas de fuego en casos de legítima defensa, fuga e intento de fuga, amotinamiento y secuestro. En caso de fuga el funcionario armado deberá realizar dos disparos preventivos antes del disparo directo que se efectuará a los miembros inferiores, además se debe evitar poner en riesgo a terceros.

En cuanto a la **vestimenta de los internos**, por medidas de seguridad, ésta será de color azul (Arto. 97 Reg).

Una disposición especial de carácter regimental es la establecida en el artículo 144 Ley 473, el cual establece que **Los funcionarios públicos** miembros del Poder Judicial, Contraloría General de la República, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, del Sistema Penitenciario Nacional, que ingresen a un Establecimiento Penitenciario, por motivo de su seguridad personal, deben ser separados del resto de la población penal.

Entre otros límites de la actuación penitenciaria está el de no infligir tratos inhumanos o degradantes a los internos, humillaciones o envilecimientos. Las medidas de seguridad son muy cuestionadas, en especial las de registro y requisa, en cuanto a la forma de efectuarlos y también en los medios exploratorios a utilizar para permitir detectar

cuerpos extraños en los internos o sus visitantes. Sin embargo estas actuaciones se justifican por las siguientes razones:

1. El interno se integra en una institución que proyecta su autoridad sobre quienes han visto modificado su *status libertatis* en virtud de una decisión judicial, adquiriendo con ello el *status* específico de individuos sujetos a un poder público (relación de sujeción especial), que no es el mismo que existe con carácter general sobre los ciudadanos.

2. A la institución penitenciaria se le encomienda la retención y custodia de los internos y debe de garantizar y velar por la seguridad y buen orden regimental del establecimiento, siendo correlativo a dicho deber el del recluso de acatar y observar las normas de régimen interior.

Repito, la **Dignidad Personal** de los Internos y los Visitantes debe respetarse en cada uno de los actos realizados con fines de seguridad penitenciaria y orden interior. Otra de las funciones que pueden llegar a afectar derechos y garantías de los privados de libertad es el **Trabajo Preventivo** que realiza la Dirección de Seguridad Penitenciaria, en coordinación con la Policía Nacional, cuando se llevan a cabo operaciones y técnicas de seguimiento y búsqueda de información y objetos relacionados con planes de fuga, tráfico de droga u otras sustancias y objetos prohibidos, delitos contra la integridad de las personas, delitos contra el patrimonio, amotinamientos, etc. (Arto. 91 Reg.).

CAPÍTULO TERCERO:

LOS DERECHOS PENITENCIARIOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

1. DERECHOS PENITENCIARIOS GENERALES

Durante la ejecución de su sentencia el interno no deja de ser ciudadano nicaragüense, si bien pierde algunos derechos, es sujeto de un tanto más en su condición especial de privado de libertad.

Los derechos reconocidos por la Ley 473 y su Reglamento a los privados de libertad los podemos clasificar en tres grandes grupos:

- Los derechos que le corresponden al recluso como persona (la vida, integridad física, honor, intimidad, igualdad).
- Los derechos que le corresponden al recluso como ciudadano de un determinado Estado (derechos civiles políticos y sociales).
- Los derechos que le corresponden al recluso como tal interno (los **Derechos Penitenciarios**, propiamente hablando). Estos derechos son susceptibles de graduación, son revocables y renunciables, su fiscalización corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Estos **Derechos Penitenciarios** están establecidos en el Artículo 95 de la Ley 473 y son:

1. A ser asesorados jurídicamente por un profesional del Derecho y tener **acceso a la justicia**; a tener libre acceso para con su defensor en los días y horas hábiles y a comunicarse privadamente con él. Según el artículo 405 CPP, la labor del defensor que patrocinó al condenado durante el proceso de cognición, termina en el momento en que la sentencia adquiere el carácter de firmeza²⁶. Sin

²⁶ Se entiende que una **sentencia es firme y definitiva** cuando no esté pendiente recurso legal contra ella o que el término previsto para dicho recurso haya vencido.

embargo este mismo defensor puede seguir ejerciendo la defensa del condenado durante la ejecución de la misma, o puede designar otro abogado defensor privado. De la misma forma si surge un incidente que merezca ser conocido por el Juez de Ejecución, esta autoridad le designará un Abogado Defensor Público o de Oficio. Las formalidades y los requisitos para nombrar al Abogado Defensor de la Ejecución de la Sentencia serán las mismas establecidas en el Código Procesal Penal para el caso del Abogado Defensor de la Causa.

2. A recibir **Información** escrita sobre su situación procesal y penitenciaria;
 3. A su **Seguridad Personal**, tanto física como moral;
 4. A la **Educación y Recreación**; El Artículo 88 de la Ley 473, ordena que en cada establecimiento penitenciario se cree una escuela para la enseñanza básica de los internos, bajo la dirección del Ministerio de Educación y ajustada a los programas básicos de educación del Estado, y deben otorgar niveles académicos y títulos a los internos que cumplan con los programas educativos. El Artículo 89 de esta misma Ley establece que los privados de libertad tienen derecho a disponer de locales apropiados para el desarrollo de las diferentes actividades educativas, culturales y deportivas, así como textos oficiales o libros diversos, revistas y periódicos de libre circulación en el país. La única limitación con relación al ejercicio de estos derechos está determinada por razones de seguridad penitenciaria.
 5. Derecho a que la Administración Penitenciaria respete y garantice su **Libertad de Culto**, sin perjuicio del derecho de quienes no deseen participar en ningún tipo de actividades de tal naturaleza, estableciendo locales y horarios para la participación en actividades religiosas (Arto. 232 Reg);
 6. **Derecho a formular Peticiones y Quejas** a la Administración Penitenciaria o Autoridad Judicial Competente y obtener una pronta resolución (Arto. 95 Ley 473); en este mismo sentido el interno tiene derecho a entrevistarse privadamente con el Director del Establecimiento Penitenciario cuando considere
-

que sus derechos están siendo afectados o puesto en peligro (Artos. 53 y 95 Ley 473 y Arto. 165 Reg);

7. A un **Régimen Alimenticio** adecuado y a poseer enseres y utensilios, prendas de vestir y artículos de uso personal;
8. A escuchar radio, leer periódicos y revistas, así como tener y conservar las relaciones con el exterior del establecimiento penitenciario; a mantener relaciones de familia e interrelación con personas u organismos de apoyo comunitario; a mantener permanente comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en su valoración y la movilidad dentro del establecimiento penitenciario;
9. A un trabajo remunerado no aflictivo; el **Trabajo Penitenciario** es la actividad penitenciaria más importante para valorar el desarrollo social del interno, el trabajo es voluntario, remunerativo, no tiene carácter aflictivo, no es una medida correctiva, no debe atentar contra la dignidad del interno y debe tener carácter formativo y productivo. El trabajo debe ser suministrado por la Administración del Establecimiento Penitenciario, sin embargo se podrán realizar contratos de trabajo de prestación de servicios con empresas o particulares fuera o dentro del Establecimiento, todo bajo la responsabilidad, supervisión y custodia de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional. El Trabajo Penitenciario es remunerado en base a la legislación laboral, a excepción de los internos incorporados a tareas de conservación, mantenimiento, aseo y ornato del Establecimiento Penitenciario u otras actividades en beneficio de la población penal (Arto. 178 Reg). En cuanto a la **higiene y seguridad ocupacional de los internos**, el Sistema Penitenciario debe garantizar las condiciones de seguridad, salud e higiene del Trabajo Penitenciario, para lo cual debe acondicionar las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo (Arto. 179 Reg). En caso de contratos laborales penitenciarios con empresas externas al Sistema Penitenciario, las autoridades de los Establecimiento respectivos deben supervisar y garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad ocupacional contemplados en el Código del Trabajo. Toda afectación al interno

en el ejercicio de sus labores corre por cuenta de la Dirección del Sistema (Arto. 77 Ley 473). No pueden trabajar los mayores de sesenta años, los sometidos a tratamiento médico, los incapacitados permanentes y las mujeres embarazadas, salvo aquellos trabajos que no afecten su condición de salud.

10. Los Privados Preventivamente de Libertad deberán ser ubicados en ambientes separados de los condenados (Arto. 55 Ley 473).

11. En los casos en que los privados de libertad sean **Ciudadanos Extranjeros**, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deben de informar por escrito a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos notifiquen a los representantes diplomáticos del país del interno (Artos. 55 Ley 473 y 40 Reg.). Especial mención merece el **Convenio entre Nicaragua y España sobre el Cumplimiento de las Condenas Penales**²⁷, en el cual se establece que las penas impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales del otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona condenada en el Estado del cual sea nacional; comprometiéndose los Estados a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas condenadas. La transferencia se llevará a cabo siempre que se cumplan las siguientes condiciones: Sentencia Condenatoria Firme y Consentimiento expreso del condenado. El trasladado no podrá ser detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado trasladante. La condena del trasladado se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas.

El Arto. 150 del Reglamento de la Ley 473, establece una serie de derechos de los privados, dentro de los más importantes están:

²⁷ Firmado el día 18 de febrero de 1995 en Managua, entró en vigor el 15 de mayo de 1997, fecha en la que tuvo lugar en Managua el intercambio de los Instrumentos de Ratificación.

1. Ser informados de sus derechos, deberes y prohibiciones dentro del centro penitenciario;
2. A ser informado en caso de defunción o enfermedad grave de familiares directos o parientes cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo mismo que su compañero o compañera en unión de hecho estable;
3. Informar a su familia en caso de enfermedad grave o muerte del interno. En caso que el interno no tenga familia que lo visite, se informará a los organismos humanitarios.

Como una vía libre a la **discrecionalidad** y por lo tanto a la vulneración de los derechos de los internos, el artículo 6 del Reglamento de la Ley 473 establece que “el Director del Centro Penitenciario donde esté ubicado el interno, podrá **limitar algunos derechos** por motivos de seguridad y tratamiento”.

2. DERECHOS PENITENCIARIOS DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

En cuanto a las **Mujeres Privadas de Libertad**, sean condenadas o sometidas a medida cautelar, se establecen que deben guardar prisión en Establecimientos Penitenciarios diferentes a los de los hombres²⁸ (Arto. 9 Ley 473).

Según el Artículo 33 de la Ley 473 cada Establecimiento Penitenciario del país deberá contar con ambientes especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren en la **Etapas de Pre y Post Natal**. En los casos en que el establecimiento penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el período pre y post natal, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen de convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad propicios para la lactancia materna. Esta disposición se aplicará únicamente para las privadas de libertad que según la ley penal, no se contempla ningún otro tipo beneficio no privativo de libertad, en los otros casos se respetará la convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los dos años de edad. Se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial de salud fuera del establecimiento penal. En los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del establecimiento penal, esta circunstancia no debe de hacerse constar en su partida de nacimiento, sino que se tendrá como lugar de nacimiento el nombre del municipio en donde este ubicado el establecimiento.

En los Establecimientos Penitenciarios con población penal femenina, su dirección y administración estará a cargo de personal del mismo sexo. Salvo por razones de orden técnico, servicios especializados, seguridad y traslado, los funcionarios serán del sexo

²⁸ El Establecimiento Penitenciario “La Esperanza”, ubicado en Managua, es el único establecimiento destinado al cuidado de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua, inicio su construcción en el año de 1985 y finalizó en el año de 1987.

masculino, bajo la supervisión y dirección del penal. Éstos no podrán desempeñar tareas de orden interior con la población penal femenina (Arto. 43 Reg.).

3. DERECHOS PENITENCIARIOS DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

Refiriéndome ahora al caso de los **Adolescentes Privados de Libertad**, debo decir antes que nada que el artículo 35 de la Constitución Política establece que los menores que cometan cualquier infracción penal no deben ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centro bajo la responsabilidad del organismo especializado.

El artículo 33 del Código penal establece que cuando una persona menor de dieciocho años cometa un delito o falta, no se le aplicará ninguna de las penas, medidas de seguridad o consecuencia accesoria prevista en este código; pero sí un adolescente podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en el Libro Tercero, Sistema de Justicia Penal Especializada del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Según el artículo 227 del Código de la Niñez y la Adolescencia²⁹, los adolescentes juzgados en base a la Jurisdicción Especial, establecida en este mismo cuerpo normativo, guardaran prisión en **Establecimientos Especiales de Detención Provisional y de Internamiento de Adolescentes**, los cuales estarán a cargo del Sistema Penitenciario Nacional³⁰. Debe haber una separación física entre **los internos adolescentes y los adultos, por dos razones muy importantes, por un lado para evitar la** influencia perjudicial y nociva de los adultos en los jóvenes, y por el otro, para establecer un tratamiento esencialmente al de los adultos.

²⁹ Ley 287, Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo de 1998.

³⁰ Actualmente, en nuestro país, no existe ningún **Establecimiento Penitenciario Especial para Adolescentes**, por ello los adolescentes privados de libertad tienen que cumplir su pena en los Establecimientos creados para adultos, pero con una galería especial para ellos.

Sin embargo, a pesar de que los adolescentes³¹ internos están sometidos a la Sujeción del Sistema Penitenciario Nacional, estos no gozan del derecho al Régimen Progresivo, puesto que la pena de prisión se le impone no excede a los seis años de prisión (Artos. 202 CNA, 104 y 105 Reg. Ley 473.). Según el artículo 203 del Código de la Niñez y Adolescencia, los delitos que conllevan privación de libertad para los Adolescentes son: Asesinato; Homicidio Doloso; Parricidio; Lesiones Graves; Violación; Abuso Sexual; Robo; Tráfico de Drogas; Incendio y otros estragos; Envenenamiento de agua potable, bebidas, comestibles o sustancias medicinales.

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional debe de seleccionar y capacitar a los funcionarios que trabajarán y brindarán atención especializada a los adolescentes privados de libertad (Arto. 142 Ley 473). El artículo 216 de este mismo Código establece que el Director del Establecimiento donde esté internado el adolescente deberá enviar a la **Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes (OEVSPA)**, un informe cada tres meses sobre la situación penitenciaria de los adolescentes internos.

Para la ejecución de las medidas de privación de libertad, los adolescentes deben someterse al **Plan Individual de Ejecución de Pena** establecido y controlado por la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes (OEVSPA), esta oficina está adscrita al Juzgado Especial de Menores. Esta oficina tiene las siguientes funciones: controlar y supervisar la Ejecución de las Medidas, resolver problemas surgidos durante la ejecución y controlar el cumplimiento de los objetivos del Código de la Niñez y Adolescencia.

³¹ En base al **Arto. 2** del Código de la Niñez, se considera niña o niño a los que no hubiesen cumplido los 13 años de edad y adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no cumplidos. El **Arto. 95** de este mismo Código, establece que la Justicia Penal Especializada para Adolescentes se aplicará a los adolescentes que tuvieren 13 años cumplidos y que sean menores de 18 años al momento de la comisión del hecho delictivo o falta penal establecido en el Código Penal o leyes penales especiales. Este mismo artículo prohíbe la aplicación de cualquier medida privativa de libertad a los adolescentes responsables de ilícitos penales que se encuentren entre las edades de trece años y quince años no cumplidos. Las medidas privativas de libertad solo se pueden aplicar a los adolescentes que se encuentren entre quince años y dieciocho años de edad.

De conformidad con el Artículo 97 de la Ley 473 y lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes privados de libertad tienen todos los derechos y garantías establecidos para los privados adultos pero con ciertas especialidades, como tener un abogado público especialista en justicia de menores, a recibir servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad, a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los condenados por la legislación penal común y ser ubicado en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución de la pena.

Tanto para los adultos, las mujeres y los adolescentes privados de libertad y en base al Artículo 47 de la Ley 473, los jueces, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, los diputados de la Asamblea Nacional, los funcionarios de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales de los Adolescentes y el Inspector General del Sistema Penitenciario, en todo momento y sin mayor trámite, podrán **inspeccionar in situ los Establecimientos Penitenciarios**, para valorar la legalidad de las condiciones de cumplimiento de las sanciones penales y medidas de privación de libertad. El abogado defensor o los interesados, cuando las autoridades del establecimiento penitenciario hagan caso omiso a sus peticiones o quejas, pueden utilizar esta vía intermedia para denunciar cualquier abuso u omisión en el cumplimiento del ordenamiento jurídico penitenciario.

4. LOS ESTÍMULOS PENITENCIARIOS

El Director del Establecimiento Penitenciario podrá otorgar a los internos, individual o colectivamente (contingente, sección o galería), ciertos beneficios como forma de **Estímulos**, por el reconocimiento de su buena conducta, disciplina y participación en las diversas actividades reeducativas del Establecimiento Penitenciario (Arto. 166 Reg). El Equipo Interdisciplinario evalúa las condiciones propuestas por el Jefe de Reeducción Penal para otorgar a los internos los estímulos que considere necesarios, esta propuesta es aprobada o denegada por el Director del Establecimiento.

Los **Estímulos** podrán ser otorgados trimestralmente a cada interno, debiendo anotarse en la Libreta de Control Individual, siguiendo los siguientes parámetros (Artos. 169, 170 y 171 Reg):

1. Disciplina y conducta.
2. Ordenamiento de sus pertenencias, aseo personal y limpieza de los locales.
3. Grado de relación con el colectivo.
4. Comportamiento y rendimiento en la instrucción escolar o capacitación.
5. Asistencia y participación en la instrucción general.
6. Participación en actividades deportivas y artísticas.
7. Incorporación al trabajo.

Los Estímulos Penitenciarios que se pueden otorgar son:

1. Entregar reconocimiento por escrito con copia al expediente, que se dará a conocer en privado, ante el contingente o familiares del interno.
2. Obsequiar libros ilustrativos con dedicatoria a los internos.

3. Otorgar progresión al régimen inmediato superior en forma anticipada, cuando haya cumplido el 85 % de permanencia en el régimen que se encuentra, esto se aplicará en el Régimen Semiabierto y Abierto.
4. Otorgar visita familiar adicional, visita conyugal adicional o visita conyugal nocturna.
5. Otorgar permisos de salida adicional, por un período comprendido, entre las 24 y 72 horas a los internos ubicados en régimen Semiabierto y Abierto.
6. Conceder permisos de salida por una semana a los internos ubicados en Régimen Abierto.
7. Suprimir de la Libreta de Control Individual una, varias o todas las sanciones impuestas antes del período evaluado.
8. Conceder salida a actividades recreativas, culturales, artísticas y deportivas fuera del área penal.

5. LOS PERMISOS DE SALIDA, COMUNICACIONES Y VISITAS

Uno de los principios básicos, sobre los que descansan los sistemas penitenciarios progresivos, es el de considerar que el interno no es un ser separado de la sociedad, sigue formando parte de la misma y a ella ha de volver en el momento que cumpla su condena, es preciso pues, que el interno no rompa, en ningún momento, los lazos que le unen con esa sociedad. Esta relación con el mundo exterior se realiza en la práctica penitenciaria a través de contactos directos, como las comunicaciones y visitas dentro del establecimiento, o contactos indirectos, a través de comunicaciones escritas y telefónicas y el acceso a los medios de comunicación.

A los internos ubicados en los Regímenes Semiabierto y Abierto, se les otorga **Permiso de Salida** sin custodia, el cual no excederá de un máximo de seis días calendario. A los internos en el Régimen Semiabierto se les otorgará este permiso de salida cada sesenta días y a los internos en el Régimen Abierto cada cuarenta y cinco días. La finalidad de los Permisos de Salida es promover el acercamiento con la familia e ir preparándolo para su reinserción a la sociedad.

Los beneficiados con los permisos de salida no deben concurrir a lugares de expendios de bebidas alcohólicas, casas de juegos, no participar en juegos de azar, abstenerse de transitar por lugares que estén restringidos por la sentencia, no provocar hechos que alteren el orden público, violencia intrafamiliar y no salir del lugar donde gozará del permiso.

Además tenemos el **Permiso Extraordinario de Salida**, por no más de 72 horas, en caso de fallecimiento o enfermedad grave del padre, madre, hermanos, hijos, cónyuge o compañero (a) en unión de hecho estable, este permiso puede ser solicitado por el interno ante el Director del Establecimiento, para visitar al familiar. Los internos de Alta Peligrosidad y los que tengan prohibido concurrir al lugar donde se cometió el delito, no pueden recibir tal beneficio. Cuando el Director otorgue el permiso extraordinario debe comunicarlo al juez competente (Arto. 69 Ley 473).

Las Comunicaciones y Visitas con los allegados o representantes legales acreditados de los internos varían en cada régimen, y puede ser de forma oral, escrita o telefónica, sin mayores restricciones que las impuestas por la seguridad y el orden, esto en base a los Artículos 70 y 71 de la Ley 473. Estas visitas y comunicaciones serán reguladas por un plan elaborado por el Director de cada establecimiento penitenciario (Arto. 132 Reg). Los internos designarán a las personas que deseen que los visiten, hasta un máximo de ocho, quienes se identificarán y registrarán en la tarjeta de control de visitantes, extendiéndosele carné de visitantes con su fotografía (Arto.127 Reg). Los visitantes registrados no podrán ser cambiado por el interno de la lista sino hasta luego de tres meses de ser registrados. En el caso del visitante cónyuge o compañero estable, el interno no puede cambiarlo del registro sino luego de seis meses de ser registrado (Arto. 129 Reg.).

En las **Visitas Familiares** ingresarán al área de visita del Establecimiento, hasta un máximo de seis personas mayores de 12 años por interno. Se permite la entrada de niños menores de 12 años, cuando vengan acompañados de sus padres, tutores o guardadores e ingresarán sin carné de visitantes. A los visitantes mayores de 12 años y menores de 16 no se les requerirá identificación para extenderles carné de visitantes (Arto. 128 Reg). Las visitas familiares tendrán una duración máxima de tres horas (Arto. 131 Reg.).

En las **Visitas Conyugales**, los internos pueden recibir a sus esposas o compañeras en unión de hecho estable, registradas en el expediente del interno. Éstas visitas durarán dos horas como máximo (Arto. 131 Reg.). Únicamente se permite el registro como cónyuge o compañero estable a una sola persona. Según el Artículo 72 de la Ley, los internos ubicados en Régimen Semiabierto y Abierto pueden recibir este tipo de visita cada ocho días. Las visitas íntimas deben gozar de la privacidad necesaria, desarrollándose sin interrupción alguna, salvo por fuerza mayor.

La periodicidad de las visitas familiares y conyugales para los internos ubicados en el Régimen de Adaptación será cada veintiún días, para los internos en el Régimen Laboral será de quince días, para los internos en el Régimen Semiabierto y Abierto será de ocho días. Los internos que se encuentren en Contingente de Seguridad y Máxima Seguridad, recibirán Visitas Familiares, Conyugales y Comunicaciones Telefónicas cada 30 días (Arto. 130 Reg).

En base al Arto. 140 del Reglamento, el Director del Establecimiento puede otorgar Permisos de **Visitas Especiales** por el término de una hora por las siguientes razones:

1. Al ingresar el interno al Centro Penitenciario.
2. Cuando es visitado por un pariente o amigo residente en el exterior o región lejana del centro penitenciario.
3. Por estímulo.
4. A los familiares que por causas justificadas no pudieron asistir a la visita familiar planificada.
5. Cuando se realice traslado del interno de un Centro Penitenciario a otro.
6. Cuando el que solicita la visita sea un pariente o amigo que de forma regular no visita al interno.

Las Comunicaciones Telefónicas se llevarán a cabo a través del servicio público del Establecimiento, con la siguiente periodicidad: los internos en Adaptación será cada quince días, los internos en el Régimen Laboral será semanal, los internos en el Régimen Semiabierto será dos veces a la semana y los internos en el Régimen Abierto no tienen restricciones para las comunicaciones telefónicas (Arto. 132 Reg). Estas comunicaciones tendrán una duración máxima de quince minutos y se efectuarán bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, de lunes a viernes en horas hábiles de trabajo (Arto. 133 Reg).

Según el Artículo 181 del Reglamento (**Prohibiciones de los Visitantes**) los visitantes de los privados de libertad no deben irrespetar a las autoridades penitenciarias, presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas o controladas, presentarse con indumentaria inapropiada para un establecimiento penal, ingresar con armas, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, controladas o medicamentos no autorizados, objetos valiosos y de uso personal, libros o materiales con contenido pornográfico o violento, aparatos de comunicación, electrodomésticos no autorizados, materiales artesanales no autorizados, los visitantes tampoco pueden entregar dinero a los internos. Según el Arto. 182 del Reglamento, el visitante que incumpla alguna de estas prohibiciones será sancionado con advertencia o amonestación y en caso de reincidencia se interrumpirá la visita y suspenderá la próxima visita inmediata. En caso de que el visitante se presente en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas o controladas, o introduce al establecimiento cualquier tipo de armas, bebidas alcohólicas o sustancias ilegales o controladas, será sancionado con interrupción inmediata de la visita sin perjuicio de interponer denuncia en su contra ante la autoridad competente, y en caso de reincidencia, se le suspenderá el derecho de visita al involucrado hasta por seis meses.

Por su parte la Administración Penitenciaria debe facilitar la **Comunicación Libre y Privada** de los internos con la Autoridad Judicial Competente y con su abogado defensor (Arto 77 Reg.). De la misma manera se reconoce que la **Asistencia Espiritual o Religiosa** es un derecho de los internos, quienes pueden comunicarse con sus guías religiosos que ellos elijan.

Por último, las comunicaciones orales y escritas de los internos pueden ser **suspendidas o intervenidas** motivadamente por el Director del Establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente de las razones que motivaron esa decisión.

8. TRATAMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DEL INTERNO

A cada interno, al momento de su ingreso al Establecimiento Penitenciario, deberá practicársele un chequeo médico con el fin de verificar y establecer su estado de salud físico y mental. Si Luego del estudio médico del privado se verifica alguna enfermedad o lesión física o psíquica, el Director del Establecimiento debe notificar esta situación al Juez de la Causa o Juez de Ejecución, para que estos tomen las medidas legales necesarias, como jueces garantes de los derechos de los privados de libertad (Arto. 38 Ley 473).

El Artículo 89 de la Ley 473 ordena que se cree en cada Establecimiento una **Unidad de Servicios Médicos Penitenciarios**, que preste servicios médicos básicos y preventivos a los privados de libertad, igualmente ordena que deben ser atendidos y asistidos sin discriminación alguna en las diferentes instalaciones del Ministerio de Salud o sus respectivas unidades de salud pública. Esta Unidad de Servicios Médicos, se encarga de brindar los servicios de supervisión control y vigilancia de la higiene y la salubridad básica requerida para cada uno de los diferentes Establecimientos Penitenciarios.

El interno puede solicitar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario o al Juez Competente que sea remitido a un centro médico privado para recibir asistencia especializada a su costa, siempre que esta asistencia sea recomendada por el Instituto de Medicina Legal (Arto. 93 Ley 473).

El Artículo 140 de las Disposiciones Transitorias y Finales de este cuerpo normativo, establece que “Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud, deberán de crear las condiciones materiales en los centros penitenciarios del país para aquellos privados de libertad a quienes les sobreviniere disminución de sus facultades mentales”. Y el Artículo 141 establece que “En caso de que un privado de libertad presente un trastorno mental temporal o permanente será referido para su tratamiento a las unidades de salud especializados del Ministerio de Salud. Si el privado de libertad

presenta por dictamen médico un trastorno mental permanente será trasladado al Hospital Nacional Psiquiátrico”.

En base al **Artículo 22 del Reglamento de la Ley 473**, el Jefe de la División de Servicios Médicos es el responsable de ejecutar acciones de prevención, promoción y protección de la salud de los privados de libertad y de los Establecimientos Penitenciarios, según las normas de salud penitenciarias elaboradas para tal efecto (Arto. 27 Reg.), y tiene la obligación de garantizar que los privados de libertad gocen del derecho a la salud en los establecimientos, los que contarán con las instalaciones médicas, equipos, instrumentales y fármacos necesarios para estos fines; esta División debe asegurarse de prestar atención médica ginecológica a las privadas de libertad y brindar atención especializada al recién nacido. De igual manera es una obligación de esta División garantizar la debida asistencia médica especializada a los privados de libertad, a través del Ministerio de Salud.

Cada establecimiento debe contar con un **Equipo Médico**, constituido por un médico general, un odontólogo, un psiquiatra, un psicólogo y un ginecólogo, así como un personal auxiliar necesario para brindar una adecuada asistencia médica (Arto. 24 Reg.). El médico de cada establecimiento deberá elaborar y mantener actualizado, desde su ingreso, el expediente clínico de los privados de libertad (Arto. 25 Reg.).

Los Directores de los Establecimientos Penitenciarios, de acuerdo a las condiciones materiales y de infraestructura, deberán separar del resto de la población penal a los internos con **enfermedad mental e infecto-contagiosa**, con base a dictámenes facultativos, de lo cual se informará al Juez que corresponda (Arto. 28 Reg.).

CAPÍTULO CUARTO:

LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN NUESTRO SISTEMA JURÍCO PENAL

1. LA PRISIÓN EN NUESTRO SISTEMA LEGAL

El artículo 51 del Nuevo Código Penal establece que son **Penas Privativas de Libertad**: la Prisión y la privación de libertad en los casos de incumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad y la falta de pago de multa. En base al artículo 50 de este código, no se reputan como penas, la detención y la prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza procesal penal, las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernamentales o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados, las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.

La prisión es una pena contra la libertad, principalmente contra la libertad ambulatoria, y se establece judicialmente por medio de sentencia condenatoria o por medio de auto de prisión preventiva, como medida cautelar, en el primer caso la prisión es considerada como un mecanismo de prevención especial para influenciar en el infractor el respeto al ordenamiento jurídico, en el segundo de los casos en considerada como un medio para lograr la eficacia del proceso penal.

Hablando de la prisión como sanción penal, se considera siempre, por su naturaleza, como una pena principal, y junto con ella pueden imponerse otras penas accesorias, como la privación de otros derechos y las multas, estas penas accesorias tendrán la misma duración que tenga la pena de prisión, salvo que la ley establezca lo contrario (arto. 48 C.P.). La pena de prisión se considera grave cuando dure cinco o más años, y será menos grave cuando dure de seis meses hasta cinco años. Establece el Nuevo Código Penal que debe tener una duración mínima de seis meses y una duración máxima de treinta años³². Esta deberá cumplirse en los Establecimientos penitenciarios destinados para tal efecto. El **Cómputo de la Pena de Prisión** debe hacerse de la siguiente manera, en base al artículo 53 del Nuevo Código Penal: cuando el reo se encuentre preso (detenido o en Prisión preventiva), la duración de la pena empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme; y

³² Nuestra Carta Magna establece en su artículo 37 que: “La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.”

cuando el reo no se encuentre preso, la duración de la prisión empezará a computarse desde el día que ingrese al establecimiento penitenciario. Sin embargo, el tiempo de privación de libertad o arresto sufrido preventivamente durante la tramitación del proceso penal, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en la causa en que dicha prisión preventiva haya tenido lugar o, en su defecto, se abonará ésta a las penas que pudieren imponerse contra el reo en otras causas, siempre que hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso en prisión.

La pena de prisión puede imponerse además como medida sancionadora por el incumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad, en caso de que el condenado incurra en tres ausencias injustificadas al trabajo, el juez de ejecución sustituirá la medida por un día de prisión por cada dos jornadas diarias de ocho horas que no haya cumplido.

El artículo 66 del código penal establece que la pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la **Inhabilitación Absoluta** durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto delictivo de que se trate. En las penas de prisión de seis meses hasta diez años, los jueces o tribunales podrán imponer, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias algunas de las siguientes: Inhabilitación Especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena o Inhabilitación Especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio o cualquier otra actividad relacionada, si estos hubieren tenido relación directa con el delito cometido.

Por último debemos tener presente que la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 33 establece que *“Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”*. *“Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente”*.

2. LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD SEGÚN NUESTRO CÓDIGO PENAL SUSTANTIVO

El artículo 402 CPP establece que el condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y facultades que le otorgan la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Nicaragua, las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos, y planteará ante el tribunal que corresponda las observaciones, recursos e incidencias que con fundamento e aquellas reglas, estime conveniente.

La Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua³³, el cual entró en vigencia a principios del mes de julio de dos mil ocho, derogó expresamente el Decreto No. 297 “Ley de Código Penal” publicado en la gaceta No. 96 del 3 de mayo de 1974 y sus diversas reformas. Hasta la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, nuestro Sistema Penal Sustantivo estaba regido por un código, por una serie de reformas al mismo y por variadas disposiciones de carácter penal en códigos normativos extrapenales (v. g. ley de préstamos entre particulares, ley de derechos de autor, ley de defensa de los consumidores, etc.), el cual estaba caracterizado por una gran falta de proporcionalidad entre las conductas antijurídicas reprochables con los supuestos punitivos encaso de su infracción.

El Nuevo Código Penal viene a sistematizar más nuestro orden jurídico penal, disponiendo una serie de garantías y principios de aplicación de la ley penal, los cuales son más acorde con el principio constitucional que considera la aplicación de las sanciones penales como medios para lograr la reinserción penal de los que delinquen.

Este nuevo cuerpo normativo establece en su artículo primero que ninguna persona puede ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal anterior a su realización. Prohíbe la aplicación de cualquier sanción penal que no esté prescrita previamente en la ley. Expresa la ley, en este mismo artículo, que

³³ Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008.

por ningún motivo la Administración Pública podrá imponer medidas o sanciones que impliquen privación de libertad.

En base a la **Excepción de Retroactividad Pro Reo** de la ley penal, ordena la ley, en su artículo segundo, que si con posterioridad a la comisión de un delito o falta o durante la ejecución de la condena, entra en vigencia una nueva ley que sea más favorable para el reo o condenado, será aplicada en beneficio de este. Esta disposición es reforzada, para el caso de los condenados, por el artículo tercero, el cual establece que si durante el cumplimiento de la pena, entrada en vigencia una nueva ley favorable para el condenado, el Juez o Tribunal competente deberá modificar la sentencia de acuerdo con la nueva ley en lo relativa a la pena o medida de seguridad; y si la condena fue motivada por un hecho considerado como delito o falta por ley anterior y la nueva ley no lo sanciona como tal, el juez o tribunal competente deberá ordenar la inmediata liberación del reo o condenado. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el condenado.

De la misma forma, en uno de los capítulos del Libro Cuarto del Código Penal, específicamente en el artículo 567, se establece el Régimen Transitorio para el nuevo sistema penal, en donde se ordena que los delitos y faltas cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código penal se juzgarán conforme al Código Penal de 1974, las leyes que lo reforman y demás leyes especiales que contienen delitos y faltas penales; Las disposiciones del nuevo código penal tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo o condenado. Los jueces podrán proceder de oficio o a instancia de parte a rectificar las sentencias que se hayan dictado antes de la entrada en vigencia del nuevo código penal, aplicando las disposiciones más favorables. Para determinar la ley más favorable para el reo o condenado, se debe tener en cuenta los elementos típicos y la pena que corresponde al hecho, además de las circunstancias agravantes o atenuantes, genéricas o específicas, la penalidad correspondiente al concurso de delitos y las causas de exclusión de la responsabilidad penal, si las

hubiere. Además se considerarán los beneficios penitenciarios que en cada caso pudieran corresponder³⁴.

El artículo cuarto de este cuerpo normativo establece que todo imputado o condenado debe ser tratado con el debido respeto a su dignidad humana, y en ningún caso podrá imponérsele penas o medidas de seguridad que impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes. Este es el **Principio de la Dignidad Humana**, establecido también en el artículo tercero de nuestro Código Procesal Penal.

Haciendo énfasis en lo que establece este código en materia de ejecución de la pena, tengo que referirme al artículo 6, de **Garantía Jurisdiccional de Ejecución**, en donde se prohíbe la ejecución de pena o medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por los tribunales de justicia competentes, de acuerdo con las leyes procesales. Tampoco se podrá ejecutar pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan. La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes, de conformidad con la ley y su reglamento. Siempre dentro de las garantías de ejecución, el artículo 8 establece que la pena no trasciende de la persona del condenado, y que no se impondrá pena o penas ni medidas de seguridad que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.

El artículo 71 del código penal establece el **Principio de Garantía de Ejecución**, en donde se prohíbe ejecutar pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada, o sea desde el momento que la sentencia pierde la susceptibilidad de ser impugnada mediante cualquier recurso.

Según el artículo 46 del código penal establece que las penas tienen un carácter reeducativo.

³⁴ En este sentido la Constitución Política establece, en su artículo 38, que: *“La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.”*

El artículo 52 establece que el cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este código penal.

El artículo 63 del código establece que las demás circunstancias de ejecución de las penas se establecerán reglamentariamente de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penitenciaria, cuyas disposiciones se aplicarán supletoriamente en lo no previsto expresamente en este código penal.

El artículo 70 del código mandata la **Suspensión de la Pena de Prisión por Trastorno Mental** grave y duradero, o por enfermedad terminal, siempre que ésta haya sido sobrevenida en prisión, según dictamen médico forense, y debiendo ser tan grave que le impida, al condenado, conocer el sentido de la pena. Durante ésta suspensión, el juez de ejecución debe asegurarse que el condenado reciba la asistencia médica necesaria, y luego de restablecida su salud, el juez ordenará que se cumpla la sentencia, siempre que la pena no haya prescrito.

El artículo 408 CPP establece que cuando se hayan dictado varias sentencias de condena contra una misma persona o cuando después de una condena firme se deba juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, un solo juez unificará las penas, según corresponda. La unificación de penas será efectuada por el juez que impuso la última de ellas observando lo dispuesto en la Constitución Política. De su decisión deberá informar a los jueces que impusieron las condenas previas y al Juez de Ejecución Competente.

El artículo 411 CPP establece que si durante la ejecución de la pena privativa de libertad, el condenado sufre alguna enfermedad que no pueda ser atendida adecuadamente en la cárcel que ponga en grave riesgo su salud o su vida, el Juez de Ejecución dispondrá, previo los informes del Instituto de Medicina Legal necesarios, la internación del enfermo en un establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para evitar su fuga. Si se trata de alteración psíquica, perturbación o alteración de la percepción del condenado, el juez de ejecución ordenará su traslado a un establecimiento especializado de atención. Las autoridades del establecimiento

penitenciario podrá hacer lo mismo, cuando se trate de casos urgentes; pero estas medidas deberán ser comunicadas inmediatamente al juez de ejecución, quien podrá revocarlas o confirmarlas. Estas reglas son aplicables a la prisión preventiva en relación con el tribunal que conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto sean susceptibles de ser suspendidas por enfermedad. El tiempo de internación se computará a los fines de la pena siempre que el condenado esté privado de libertad.

El artículo 412 CPP, establece la Ejecución Diferida de la pena de prisión, la cual puede ser suspendida por el juez de ejecución cuando deba cumplirla una mujer en estado de embarazo o con un hijo menor de un año de edad, o cuando el condenado se encuentre gravemente enfermo, o padeciere de alguna enfermedad crónica grave y la ejecución de la pena ponga en peligro su vida, según dictamen médico legal. Cuando cesen éstas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose.

3. FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

El **Cumplimiento de la Condena Privativa de Libertad**, que supone, normalmente, el ingreso y estancia en el Establecimiento Penitenciario durante el tiempo fijado en la Sentencia Condenatoria, es considerado como la Causa Jurídica Natural de Extinción de la Responsabilidad Penal.

Sin embargo existe en nuestro ordenamiento jurídico penal una serie de medidas de sustitución de las penas privativas de libertad, las cuales operan como mecanismos, que permiten extinguir parcialmente este tipo de pena, siempre y cuando el condenado reúna una serie de requisitos legales, establecidos en el Código Penal y en la Legislación Penitenciaria, para la aplicación de determinada medida sustitutiva.

Son **Penas Alternativas o Sustitutivas a la Pena de Prisión** aquellas penas que sustituyen a la privación de la libertad de un condenado en una institución penitenciaria. Si bien es cierto que la pena de prisión es una sanción más humana que la pena de muerte o las penas corporales, no obstante resulta muy inhumana si la comparamos con penas alternativas a ella como la pena de días- multa, libertad condicional, el trabajo en beneficio de la comunidad u otras penas privativas de derechos. La pena de prisión se trata de una sanción excesiva y, por ello, sustituible por otro tipo de penas menos graves. Sólo cuando se demuestre la imposibilidad de una pena alternativa a la prisión de operar como desincentivo para un determinado delito cabrá decir que por razones de efectividad se requiere recurrir a una pena de prisión. Debemos recurrir a las penas de prisión solo en los casos de conductas calificables de graves³⁵.

La sustitución de la ejecución de la pena privativa de libertad opera como Beneficios Penitenciarios reconocidos y garantizados por el Ordenamiento Jurídico Penal a los

³⁵ Cid Miliné, J. (s. f.). *El Sistema De Penas Desde Una Perspectiva Reduccionista: Alternativas A La Pena De Prisión*, (s. n.).

Privados de Libertad que cumplan determinados requisitos penales y penitenciarios. La sustitución de estas penas permiten la reducción de la condena impuesta, o en todo caso del tiempo de internamiento efectivo en prisión y están concebidos como estímulos para conseguir, que el interno se adapte a unos modos de comportamiento, cuya valoración será determinante para otorgar al interno mayores márgenes de libertad.

Las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad reconocidas en nuestro Código Penal son:

1. SUSPENSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.
2. SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.
3. EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL.
4. LIBERTAD CONDICIONAL.

a) Suspensión de la pena de Prisión

Los jueces o tribunales sentenciadores podrán dejar en suspenso las penas privativas de libertad de hasta cinco años mediante resolución motivada y previa audiencia con las partes, atendiendo el nivel de peligrosidad criminal del condenado, las características del hecho y la duración de la pena. El plazo de suspensión será por un **Periodo de Prueba Condicional** de dos a cinco años para las penas privativas de libertad de hasta cinco años, y de tres meses a dos años para las penas leves. La suspensión de las penas no se hará extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito.

Los requisitos para el otorgamiento de este beneficio son los siguientes:

1. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes

penales que hayan sido cancelados o deberían serlo con arreglo a lo dispuesto en el código penal;

2. Que la pena impuesta, o la suma de las impuestas en una sola sentencia, no sean superior a los cinco años de prisión;
3. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, salvo que el juez o tribunal sentenciador, declarase la imposibilidad parcial o total de hacerle frente a tal responsabilidad;
4. Que la sentencia haya quedado firme (arto. 89 C.P.)
5. En caso de solicitud de suspensión de condenas por delitos perseguibles a instancia particular, el juez deberá oír a la parte ofendida o a su representante, antes de conceder el beneficio. (arto. 93 C.P.).

Durante el periodo de prueba establecido por el juez, el beneficiado no debe volver a infringir las normas penales, y debe cumplir con todas las condiciones impuestas por esta autoridad, como por ejemplo: la prohibición de acudir a determinados lugares, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización judicial, sujetarse a la vigilancia de la autoridad, presentarse periódicamente ante el juez de manera personal para informar sobre sus actividades y justificarlas, etc. (arto. 90 C.P.)

En caso de incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por la autoridad judicial, previa audiencia con las partes, el juez o tribunal podrá **Prorrogar el Periodo de Prueba**, sin que en ningún caso pueda exceder de los cinco años. Sin embargo, si el incumplimiento es reiterado, el juez o tribunal podrá ordenar la **Revocación de la Suspensión**, y la ejecución efectiva y completa de la pena impuesta. De la misma forma declarará directamente la revocación, sin necesidad de conceder prórroga del periodo, en caso de que el beneficiado cometa cualquier infracción punible (Artos. 91 y 92 C.P.)

b) Suspensión de la Pena de Prisión por Enfermedad Grave

Los jueces sentenciadores podrán hacer la suspensión antes mencionada sin sujeción a ningún requisito en el caso de que el condenado esté aquejado de una enfermedad

muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo de la enfermedad. Para el otorgamiento de este beneficio los jueces o tribunales sentenciadores requerirán el Dictamen Médico Legal correspondiente (7 parte in fine y 88 inc. d) C.P.).

c) Sustitución de la Pena de Prisión

Los jueces o tribunales, antes de dar inicio a la ejecución de las condenas privativas de libertad, podrán sustituirlas por días multas. Este beneficio se puede hacer otorgar en la misma sentencia, o con posterioridad por auto motivado y previa audiencia con las partes. Solo pueden ser sustituidas aquellas condenas que no excedan de un año de prisión. Para otorgar este beneficio el juez debe valorar los siguientes factores: las circunstancias personales del condenado, su conducta, la naturaleza del delito y el esfuerzo por reparar el daño causado. A los considerados reos habituales no se les aplicará este beneficio. Cada día de prisión será sustituido por dos días multas. Según el artículo 64 del código penal, la pena de días multa consiste en el pago de una suma de dinero determinada, la cual será fijada por los jueces y tribunales, motivadamente, conforme a la situación económica del acusado, tomando en cuenta todos sus ingresos diarios y sus gastos razonables para atender sus necesidades y la de su familia. Un día multa será calculado sobre la base de una tercera parte del ingreso diario del condenado. En caso de que no se pueda determinar ese ingreso, se tomará como base el salario mínimo del sector industrial vigente al momento de cometerse el delito. Corresponderá a las partes demostrar al juez la verdadera situación económica del acusado. La multa se cumplirá pagando la cantidad señalada a beneficio del Sistema Penitenciario, el cual será destinado para mejorar la calidad de vida, infraestructura y programas de tratamiento para la población penal. La multa deberá ser pagada totalmente dentro de los treinta días después de haber sido impuestas, sin embargo a solicitud de la parte interesada, el juez podrá autorizar un plazo mayor o el pago en cuotas sucesivas, tomando en cuenta a la situación económica del condenado, estos beneficios podrán ser modificados, y aún revocados, en caso de variaciones sensibles en su situación económica. Si el beneficiario posee bienes propios, el juez podrá

ordenar que se otorgue garantía sobre los mismos, y en caso de que el beneficiado no pague la multa en el plazo establecido, se procederá a la ejecución judicial de esos bienes.

También se pueden sustituir las penas de prisión inferiores a un año, atendiendo las circunstancias del reo y del hecho, por trabajos en beneficio de la comunidad, sustituyendo cada día de prisión por una jornada de trabajo. En este caso el juez podrá además imponer la observación de los siguientes deberes y prohibiciones: la prohibición de acudir a determinados lugares, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización judicial, sujetarse a la vigilancia de la autoridad, presentarse periódicamente ante el juez de manera personal para, informar sobre sus actividades y justificarlas, etc. (arto. 90 C.P.).

En caso de incumplimiento total o parcial de la pena sustitutiva, se ordenará la ejecución efectiva de la pena de prisión pero con descuento de la parte de tiempo que se haya cumplido, de acuerdo a las reglas de conversión establecido en el código penal para cada tipo de pena. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean a su vez sustitutivas de otras.

d) Sustitución Excepcional de la Pena de Prisión

Las autoridades judiciales podrán sustituir excepcionalmente las penas de prisión que no excedan de dos años, cuando los condenados no sean reincidentes, y se demuestre que, según las circunstancias del hecho y del condenado, el cumplimiento de la pena de prisión vendría a frustrar la efectiva reinserción social de aquel. En este caso, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos de conversión establecidos para la sustitución ordinaria.

e) La Expulsión del Territorio Nacional

El artículo 95 del código penal establece que las penas privativas de libertad inferiores a cinco años, impuestas a un extranjero con entrada o permanencia ilegal en Nicaragua, podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio nacional a instancia del Ministerio Público. El extranjero expulsado no podrá ingresar a Nicaragua por un periodo no menor al doble de la pena impuesta por el delito cometido, contado a partir de la fecha de su expulsión. Si el extranjero regresa antes de este tiempo, se ordenará el cumplimiento efectivo de las penas que le hayan sido sustituidas.

La Expulsión es una pena sustitutiva a la pena de prisión, la decreta el Juez de la Causa por Auto Motivado susceptible de apelación. Esta medida se basa en la política penitenciaria de evitar la sobrepoblación penal. La Expulsión puede ser considerada, algunas veces como una medida restrictiva de derechos y en otras ocasiones como un beneficio según se impusiera contra la voluntad del reo o a petición del mismo.

El efecto de la sustitución es el archivo de la ejecución de la pena y la imposición judicial de una prohibición de regreso a nuestro territorio por un período no menor al doble de la pena impuesta por el delito cometido, contados a partir de la fecha de su expulsión. Si regresa cumplirá las penas que le hayan sido sustituidas.

f) La Libertad Condicional

Los internos tienen **Derechos a ser Liberados** por el cumplimiento efectivo de la condena impuesta, con la libertad se da por terminada la Relación de Sujeción que tiene la Administración Penitenciaria sobre su persona. Pero debemos distinguir el derecho de los internos a la **Libertad Definitiva** del derecho a la **Libertad Condicional**³⁶.

³⁶ Nistal Burón, J. Op. Cit. (s. n.).

La Libertad Condicional es un beneficio que otorga el juez de ejecución, dando por terminada la Relación de Sujeción del condenado con la Administración Penitenciaria, pero sujetándose subsiguientemente a la vigilancia judicial, pero esta vez en libertad, por un periodo de prueba determinado, después del cual, se le concederá el Derecho a la Libertad Definitiva. En la libertad condicional, la extinción de la responsabilidad penal queda sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas fundamentadamente por la autoridad judicial.

El artículo 96 del código penal establece que se concederá el beneficio de la libertad condicional en las penas de prisión que excedan de cinco años, para aquellos condenados que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta;
- b) Que hayan observado buena conducta y exista, respecto de los mismos un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por las autoridades penitenciarias.

El periodo de prueba para la libertad condicional comprenderá el tiempo que falta para el cumplimiento de la condena. Durante este periodo de prueba el beneficiado estará bajo la vigilancia de la autoridad y deberá presentarse periódica y personalmente ante la misma. Si durante este periodo de prueba el beneficiado cometiere un nuevo delito o violare los deberes y prohibiciones impuestas, se revocará libertad condicional y se le hará efectivo el resto de la condena que haya dejado de cumplir.

g) La Libertad Condicional Extraordinaria

El artículo 97 del código penal establece que los condenados que hubieren cumplido los setenta años de edad y reúnan los requisitos establecidos para la libertad condicional ordinaria, excepto el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena, podrán obtener el beneficio de la libertad condicional. Igualmente se concederá de forma extraordinaria la libertad condicional a los privados de libertad que

padezcan enfermedades muy graves, con padecimientos incurables y terminales, previo dictamen del Instituto de medicina Legal.

h) La Acción de Revisión de Sentencia

Esta acción procesal a favor del condenado está regulada en los artículos 337 y siguientes del Código Procesal Penal, siendo un requisito de procedibilidad la firmeza de la sentencia. Debemos tener claro que con la acción de revisión no se pretende absolver al condenado, o de variar la calificación jurídica o la pena, por una nueva apreciación de los mismos hechos conocidos en el proceso anterior o de una nueva valoración de la prueba existente en el primer juicio. El condenado puede recurrir a esta acción en uno de los siguientes casos:

1. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables o excluyentes con los establecido por otra sentencia penal firme;
2. Cuando la sentencia condenatoria se haya fundado en prueba falsa o en veredicto ostensiblemente injusto a la vista de las pruebas practicadas;
3. Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta o cualquier otro delito cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme;
4. Cuando se demuestre que la sentencia es consecuencia directa de una grave infracción a sus deberes cometidos por un juez o jurado, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente;
5. Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que evidencien que el hecho no fue cometido por el condenado o que el hecho cometido no es punible o se encuadra en una norma más favorable;
6. Cuando deba aplicarse retroactivamente una ley posterior más favorable, o cuando la ley que sirvió de base a la condena haya sido declarada inconstitucional;
7. Cuando se produzca un cambio jurisprudencial que favorezca al condenado, en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

La Acción de Revisión puede proceder aún cuando la pena o medida de seguridad haya sido ya ejecutada o se encuentre extinguida. Están legitimados para interponerla: el Condenado, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, y, en caso de que el condenado haya fallecido, puede interponerla su cónyuge, su compañera o compañero estable, sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad.

Los Tribunales de Revisión competentes, que reciben, conocen y resuelven sobre la acción de revisión, son (Arto. 21 CPP): las Salas Penales de los tribunales de apelaciones, en las causas por delitos menos graves, y la Sala de lo Penal de la Corte suprema de Justicia, en las causas por delitos graves. El actor de revisión debe señalar un abogado defensor privado, si no lo hace, el tribunal competente le nombrará uno de oficio o un defensor público. En principio la interposición de esta acción no suspende la ejecución de la sentencia, sin embargo el tribunal competente, en cualquier estado del trámite, puede ordenar la suspensión de la ejecución y la libertad del condenado o sustituir la prisión por otra medida cautelar (Arto. 341 CPP).

Luego de la celebración de la audiencia de revisión, en donde las partes evacuarán sus medios de prueba y expresaran oralmente sus argumentos sobre la procedencia de la acción, el tribunal dictará sentencia rechazando la acción de revisión o anulando la sentencia impugnada, en éste último caso, el tribunal ordenará la celebración de un nuevo juicio ante juez y tribunal diferente, el cual no puede imponer una sanción más grave que la fijada en la sentencia revisada ni desconocer beneficios que ésta haya acordado. Además el tribunal puede anular la sentencia revisada y proceder directamente a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

La sentencia del tribunal de revisión ordenará la libertad del acusado, la restitución de la multa, la cesación de la inhabilitación, de las penas accesorias y de las medidas de seguridad, y la devolución de los efectos decomisados. Si corresponde se fijará una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo. La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena. A solicitud del interesado, el tribunal ordenará la publicación de una síntesis de la sentencia absolutoria en un medio de prensa escrito.

El rechazo de una solicitud de revisión y sentencia confirmatoria de la anterior no perjudicarán la facultad de ejercer una nueva acción, siempre y cuando se funde en razones diversas (Arto. 347 CPP).

4. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

Según el artículo 130 del código penal, la responsabilidad penal se extingue por cualquiera de las siguientes causas:

- a) La **Muerte** del imputado, acusado o sentenciado;
- b) El **Cumplimiento de la Condena**;
- c) El **Indulto**, cuyo efecto se limitará a la extinción total o parcial de la condena, será determinado en cada caso por la Asamblea Nacional. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por Delitos Contra el Orden Internacional (Genocidio, Apartheid, etc.).
- d) La **Amnistía**, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias, y todos sus efectos. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por Delitos Contra el Orden Internacional (Genocidio, Apartheid, etc.).
- e) El **Perdón del Ofendido**, cuando la ley así lo prevea; éste podrá ser otorgado en cualquier estado del proceso y de la ejecución de la pena.
- f) La **Prescripción de la Acción Penal**; la acción penal prescribe a los **veinte años** cuando la pena máxima señalada al delito sea de prisión de quince o más años; a los **quince años** cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de diez años y menos de quince años; a los **diez años** cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de cinco años y menos de diez años; a los **cinco años** los restantes delitos graves; a los **tres años** los delitos menos graves. Los delitos de **calumnia e injuria** prescriben a los treinta meses. Las **faltas penales** prescriben a los tres meses. La acción penal en los delitos señalados en el artículo 16 del código penal no prescriben en ningún caso. Estos plazos para la prescripción empezarán a computarse desde el día en que se haya cometido la infracción penal, o se haya realizado el último acto, en los casos de delitos continuados o permanentes.
- g) La **Prescripción de la Pena**; las penas impuestas por sentencia firme prescribirán a los veinticinco años las de prisión de quince o más años; a los veinte años las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más

de diez y menos de quince años. A los quince años, las de inhabilitación por más de seis y menos de diez años y las de prisión por más de cinco y menos de diez años. A los diez años, las restantes penas graves. A los cinco años las penas menos graves. Al año las penas leves y faltas. Las penas impuestas por los delitos señalados en el artículo 16 del código penal no prescribirán en ningún caso. El tiempo para la prescripción empezará a computarse desde la fecha en que la sentencia haya quedado firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta se comenzó a cumplir; o, desde que se revoque la condena de ejecución condicional o libertad condicional.

- h) La aplicación firme de uno de las manifestaciones del **Principio de Oportunidad**;
- i) Los demás casos expresamente señalados por la ley.

El artículo 136 del código penal regula lo de la **Cancelación de Antecedentes Delictivos**, la cual es considerada como un derecho que tienen aquellas personas que han hayan extinguido su responsabilidad penal, es otorgado por la autoridad correspondiente previo informe del juez o tribunal sentenciador. Los requisitos para la cancelación de los antecedentes son: tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes del delito en caso de solvencia del sentenciado, y haber transcurrido, sin delinquir seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves, y cinco para las penas graves.

5. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVATIVAS DE LIBERTAD

El Código Penal regula en uno de sus capítulos la aplicación de las **Medidas de Seguridad**, estableciendo en su artículo 98 que éstas serán aplicadas por la autoridad judicial en la sentencia cuando se evidencie cierto grado de Peligrosidad Criminal del condenado, la cual se demostrará teniendo en cuenta las circunstancias del hecho delictivo y personales del sujeto. Las medidas de seguridad tienen como finalidad prevenir la comisión de futuras conductas delictivas, o sea reprimir su peligrosidad criminal, por lo tanto aquellas deben ser proporcionales a ésta, no debiendo ser más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.

En cuanto a la **Aplicabilidad** de las medidas, la autoridad Judicial establecerá un límite máximo de duración, y en el caso de que el delito cometido no acarree pena privativa de libertad el Juez está obligado correlativamente a imponer medidas que sean privativas de la libertad del condenado.- Pero, si en el supuesto de que el delito acarree pena privativa de libertad, es permitido imponer de la misma manera medidas privativas de libertad, en este caso tales medidas no podrán tener una duración mayor que el límite máximo de la pena señalada legalmente para el delito cometido.- En el caso de que el Juez sentenciador aplique en una misma sentencia sanciones punitivas y además medidas de seguridad que sean privativas de libertad, se ordenará que se cumpla primero la medida de seguridad la cual se abonará a la pena de prisión impuesta.-

La persona que comete un delito bajo cualquier alteración psíquica permanente o transitoria, o bajo un estado de perturbación, o por sufrir alteraciones en la percepción y la conciencia desde la infancia, y que no pueda, por lo tanto, comprender la ilicitud del hecho, está exenta de responsabilidad penal (arto. 34 numeral 1, 2 y 3), sin embargo, en estos tres casos, puede aplicársele a la persona la medida de seguridad de internamiento es un establecimiento adecuado para el tratamiento médico o educación especial, en el primero y tercer caso, o en un centro de deshabitación, público o privado acreditado para tal efecto en el segundo de los casos, todo esto sin perjuicio de

la aplicación de otras medidas de seguridad necesarias para prevenir la peligrosidad criminal del sujeto (Arto. 103-105 C.P.).

El artículo 107 del Código Penal establece una serie de medidas de seguridad no privativas de libertad sino de otros derechos, que no serán, por lo tanto, objeto de tratamiento en este trabajo.

El artículo 108 de este mismo Código establece que si el sujeto es extranjero, con entrada o permanencia ilegal en Nicaragua, la autoridad judicial podrá acordar la expulsión del territorio nacional como medida sustitutiva a la medida de seguridad privativa de libertad. La persona sujeta a esta medida no podrá volver a entrar a Nicaragua por un plazo no menor al doble de la duración de la medida de seguridad que le sería aplicable, sin que pueda exceder de diez años.

El artículo 109 del Código Penal ordena la aplicación de una Medida de Seguridad a los **Delincuentes Habituales**³⁷, cuando éstos sean responsables de la comisión de delitos sancionados con prisión cuyo límite máximo sea superior a seis años, debiéndoseles aplicar la medida de tratamiento de terapia social para su reinserción por el periodo de su condena.

Según el artículo 100 del nuevo Código Penal las medidas de seguridad pueden clasificarse en privativas de libertad y en Privativas de otros derechos, dentro de las primeras tenemos: El internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabitación, el internamiento en centro educativo especial y el internamiento en centro de terapia social.- Dentro de las medidas privativas de otros derechos tenemos: La sujeción a la vigilancia de la autoridad o libertad vigilada, que obligará al penado a presentarse personalmente de manera periódica, la prohibición de estancia y residencia en determinados lugares, la privación del derecho a conducir vehículos

³⁷ Según el arto. 109 del Nuevo Código Penal “se considera habitual al delincuente que hubiere sido condenado por tres o más delitos que, no habiendo sido cancelado registralmente, hagan presumible su inclinación a delinquir, según declaración expresa del juez o tribunal, previos los informes periciales que sean precisos”.

automotores, la privación de licencia o del permiso de portar armas, la inhabilitación profesional, y la expulsión de territorio nacional de extranjero no residente legalmente en Nicaragua.-

Si el condenado que ha sido sometido a una medida de seguridad privativas de otros derechos y la quebranta, la autoridad judicial puede ordenar la sustitución de la medida quebrantada por una medida privativa de libertad o de internamiento, siempre y cuando ésta medida privativa esté prevista para el supuesto de que se trate.- El sometido a una medida de seguridad de internamiento no podrá abandonar el establecimiento sin autorización judicial, si lo hace estará quebrantando la medida impuesta y tendrá que ingresar nuevamente al mismo centro de internamiento del que se haya evadido, o en otro centro según corresponda su estado.

Es obligación de la autoridad judicial, en este caso el Juez de Ejecución de Sentencia valorar, con auxilio de los peritos calificados, la peligrosidad criminal del condenado, y una vez que se demuestre que tal peligrosidad ha desaparecido es obligación del Juez decretar el cese definitivo o provisional- condicional de las medidas de seguridad aplicada.- En el caso de la aplicación de penas privativas de libertad y de medidas con el mismo carácter, establece la ley que se cumplirá primero la medida, una vez cumplida ésta se abonará a la pena, sin embargo el Juez podrá suspender el cumplimiento del resto de la pena, por un plazo no superior a su duración o aplicar alguna de las medidas previstas en el Código Penal, cuando se demuestre que el condenado tiene un pronóstico de reinserción social y de cesación de la peligrosidad criminal.-

En base al artículo 135 del código penal, las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si son privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si son privativas de libertad igual o inferior a tres años o tuvieren otro contenido. El tiempo para esta prescripción empezará a correr desde el momento en que quedó firme la resolución, o en el caso del cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a

cumplirse. Si el cumplimiento de una medida es posterior al de una pena, el plazo se empezará a computar desde la extinción de esta.

El artículo 413 CPP establece que las disposiciones establecidas para la ejecución de la penas serán aplicables de forma supletoria para las medidas de seguridad.

El juez examinará periódicamente la situación de las personas sometidas a una medida de seguridad, y fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, previo informe del establecimiento de internamiento y de los peritos competentes. La decisión, luego del examen, se referirá a la cesación o continuación de las medidas de seguridad y, en este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento. Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundamentado, de que desaparecieron las causas que motivaron el internamiento, procederá a su sustitución o cancelación.

6. EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA

En base al artículo 21 parte in fine del Código Procesal Penal los Jueces de Ejecución de la Penal controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. De la misma manera el artículo 403 CPP establece que la sentencia será ejecutada por los Jueces de Ejecución cuya competencia será establecida en el acuerdo de nombramiento dictado por la Corte Suprema de Justicia.

Durante la fase de ejecución de la condena el privado de libertad esta en un estado de sujeción por parte del Sistema Penitenciario y necesita de protección especial por parte de una autoridad independiente e imparcial que salvaguarde sus derechos propios de un ser humano frente a los posibles abusos de la Administración Penitenciaria. Esta función les corresponde a los Jueces de Ejecución de Sentencia, estos Jueces deberán fiscalizar la actividad penitenciaria, a fin de garantizar los derechos de los reclusos, corrigiendo los abusos y desviaciones que puedan observarse en el cumplimiento de las penas privativas de libertad³⁸.

Con el Código Procesal Penal de Nicaragua nace en nuestro país la figura del juez de ejecución de sentencia³⁹, este Código, en su Arto. 423 adicionó un nuevo artículo (el Arto. 51 bis), y un nuevo capítulo (el Capítulo V bis) al Título VIII (Del Personal al Servicio de la Administración de Justicia), de la Ley N° 260 "*Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua*"⁴⁰, el que se leerá así: *Arto. 51 (bis) Los Jueces de Ejecución de Pena controlarán que las penas y de las medidas de seguridad se*

³⁸ Alonso De Escamilla, A. (1985). *El juez de Vigilancia Penitenciaria*, (s. n.).

³⁹ En la Circunscripción Judicial de Managua existen cuatro **Jueces de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria**.

⁴⁰ Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 137 de 23 de julio de 1998.

ejecuten observando sus finalidades constitucionales y legales, y tendrán las atribuciones que les señale la legislación procesal penal."

Según el artículo 407 CPP, los Jueces de Ejecución ejercerán las siguientes atribuciones:

1. Hacer comparecer ante sí a los condenados o a los funcionarios del Sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control;
2. Mantener, sustituir, modificar y hacer cesar las penas y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento;
3. Visitar los Centros de reclusión, por lo menos una vez al mes, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estime conveniente;
4. Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos;
5. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias;
6. Aprobar las sanciones de ubicación en celda de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, y;
7. Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de las penas no privativas de libertad.

Por su parte y en esta materia, el artículo 420 CPP establece que "Mientras no sean nombrados los jueces de ejecución, las funciones asignadas a éstos serán desempeñadas por los correspondientes jueces de sentencia".

Las atribuciones que establece nuestro Código Procesal Penal a los Jueces de Ejecución las podemos dividir en dos facetas diferentes, por un lado el Juez de Ejecución responde al propósito de judicializar la ejecución, es decir, a reforzar la garantía de ejecución, convirtiéndola de administrativa en judicial, y por otro el Juez de

Ejecución se convierte en el garante del correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en los casos en los que directa y particularmente resulten afectados los derechos de los internos, o sea es un Juez de Vigilancia Penitenciaria. Entonces tenemos por un lado a un Juez de Ejecución propiamente dichos que conocerá sobre los incidentes de ejecución de condena, libertad condicional, y cualquier tipo de medida de acortamiento de la condena, resolver los recursos contra la Administración Penitenciaria, y en General todos aquellos asuntos referentes al cumplimiento de pena impuesta y resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo previsto en las leyes y reglamentos. Por otro lado, dentro de la misma figura judicial, tenemos al Juez de Vigilancia Penitenciaria, con funciones que exceden del marco estricto de la ejecución penal y afecta a todos los internos, como por ejemplo: salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse, aprobar las sanciones de aislamiento en celda, resolver por vía de recurso, las reclamaciones formuladas contra sanciones disciplinarias, decidir sobre las peticiones y quejas formuladas en relación con derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios afectados por el régimen o el tratamiento, visitar los establecimientos penitenciarios, etc.

7. EL INCIDENTE JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE PENA

Según el artículo 404 CPP, el Ministerio Público, el acusador particular, el querellante, el condenado o su defensor podrán plantear ante el competente Juez de Ejecución de la pena incidentes relativos a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad.

La Sentencia Firme es un requisito de procedibilidad en la ejecución de la condena, hay sentencia firme cuando ésta no es susceptible de ser impugnada a través de los recursos, ya sean ordinarios o extraordinarios, es a partir de la firmeza de la sentencia cuando podemos decir que inicia el proceso de ejecución de la sentencia penal (Arto. 409 CPP). Sin embargo, el hecho de que una sentencia haya quedado firme, dando lugar al inicio del proceso de ejecución, no es motivo suficiente para afirmar que el condenado este privado de sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales propios de la persona⁴¹, ya que éstos solo pueden restringirse cuando sean incompatibles al cumplimiento de la condena y así lo haya determinado el juez en su sentencia, máxime si de tiene en cuenta que en nuestra legislación las penas tienen un carácter reeducativo (arto. 39 Cn), y, consecuentemente, todo aquello que contradiga este principio puede ser objeto de recurso por la persona afectada o su representante.

La petición del otorgamiento de cualquiera de los beneficios y recursos establecidos en el código penal, procesal penal y en la legislación penitenciaria, pueden ser hechas por el propio condenado o a través de representante o abogado, también pueden ser otorgadas por el propio Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, de oficio, en su función de vigilante del respeto de los derechos penitenciarios, de la misma manera el Director del Establecimiento Penitenciario o del mismo Sistema Penitenciario puede, de oficio, proponer al Juez de Ejecución Competente la sustitución de la prisión⁴².

⁴¹ Barrientos Pellicer, C. R. y otros. (2006) **Manual de Derecho Procesal Penal Nicaragüense**, págs. 590 y sigs.

⁴² En éste mismo sentido, el Director General del Sistema Penitenciario, por medio del Ministro de

La vía procesal legal para decidir sobre el otorgamiento de cualquiera de estos beneficios es a través de un **Incidente de Ejecución de la Pena** ante el Juez de Ejecución competente. La Administración Penitenciaria tiene la obligación de presentar al interno para la celebración de cualquier audiencia de ejecución para la cual se le convoque.

Esta Audiencia debe ser oral y pública⁴³, teniendo como objetivo principal el conocimiento y la resolución por parte del juez sobre cualquier Incidente que se suscite durante la ejecución de la condena penal. En esta audiencia el **Ministerio Público**, como representante de la **Parte Ofendida**, actúa como contraparte del condenado y su defensor, siguiendo el mismo **Principio de Contradicción** del Proceso Penal Cognoscitivo.

Cuando el condenado sea parte de un incidente de ejecución, el juez, antes o durante la celebración de la audiencia, le informará que tiene derecho de nombrar un defensor privado, y si este es incapaz de afrontar con los gastos de un abogado privado o no quiere contratarlo, el juez procederá a solicitar la intervención de la **Defensoría Pública**⁴⁴ para que le nombre un defensor público, u ordenará la intervención de un **Defensor de Oficio (Arto. 406 CPP)**. El ejercicio de la defensa durante la Ejecución de la Pena consistirá en el asesoramiento al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos. No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.

En su condición de parte, la víctima tiene derecho de asistir a esta audiencia, aún cuando no se le haya notificado, y podrá opinar respecto del incidente de ejecución, y

Gobernación, elaborará al Presidente de la República, listas de Privados de Libertad con posibilidades para gozar del **Beneficio del Indulto** (Arto. 46 Ley 473).

⁴³ Por lo que respecta a la Circunscripción Judicial de Managua, las autoridades judiciales acostumbran a celebrar estas Audiencias de Ejecución de forma privada, solo con la intervención de las partes que hayan sido debidamente citadas.

⁴⁴ Cabe mencionar que la Defensoría Pública del Departamento de Managua cuanta con una **Unidad Especializada de Ejecución de las Condenas Penales**.

podrá ser notificada para subsiguientes audiencias, siempre y cuando señale lugar para tal efecto. Sin embargo la inasistencia de la víctima no es causal para suspender la audiencia ni viciará a la misma de nulidad.

Igual que como sucede en el Proceso Penal de Cognición, el acusado no tiene ningún deber de declarar en esta audiencia y si lo quiere hacer, el juez le informará sobre su derecho de guardar silencio.

La autoridad judicial, por medio de oficio, puede solicitar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario donde esté internado el condenado, para que gire una **Hoja de Evaluación de Conducta**, en la cual se establezca la **Situación Penitenciaria del Condenado**, y entre otros aspectos, los siguientes: tiempo de efectiva prisión, los antecedentes penitenciarios, los aspectos disciplinarios e integración en actividades reeducativas, escolares, laborales, artísticas, deportivas. En esta hoja la Administración Penitenciaria realiza sus conclusiones sobre los pronósticos de reinserción social del condenado. En la práctica interna son los responsables de Control y Reeducción Penal los encargados de tramitar y elaborar las evaluaciones de conducta antes referidas (Arto. 70 Reg).

Según el artículo 404 CPP todo Incidente de Ejecución debe ser resuelto dentro del plazo de cinco días, previa audiencia a los demás intervinientes. Si fuere necesario incorporar elementos de prueba, el Juez de Ejecución, aún de oficio, ordenará una Investigación Sumaria, después de la cual decidirá. Los incidentes relativos a la Libertad Anticipada y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de Ejecución lo estime necesario, serán resueltos en Audiencia Oral citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate.

Según el artículo 405 CPP, durante el trámite del Incidente de Ejecución el Juez podrá ordenar la **Suspensión Provisional de las Medidas Administrativas Penitenciarias** que sean impugnadas a través del incidente.

Según el artículo 333 CPP, en los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables de forma supletoria las reglas del juicio por delitos. Esta disposición se aplica

también al procedimiento judicial de ejecución de sentencia, debido a que se trata de un procedimiento penal especial.

El Juez de Ejecución decidirá sobre el incidente a través de un **Auto Fundado**, de esta resolución procede el **Recurso de Apelación**, el cual se debe interponer dentro del plazo de tres días desde su debida notificación. El escrito de apelación se interpondrá ante el juez de ejecución para ser conocido por la respectiva Sala Penal del Tribunal de Apelaciones. Durante la tramitación de este recurso no se suspenderá en ningún caso la ejecución de la condena. De la resolución de la Sala Penal no cabrá Recurso Extraordinario de Casación.

CONCLUSIONES

A continuación viene una exposición conclusiva de los aspectos estrictamente normativos que caracterizan al Derecho Penitenciario Nicaragüense, haciendo énfasis en el reconocimiento legal del fenómeno de la Reinserción Social de los privados de libertad.

El **Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua** se caracteriza, en su aspecto estrictamente normativo, dejando a un lado las realidades socioeconómicas y culturales de nuestro país, por ser un sistema avanzado, muy eficiente y práctico para lograr la reinserción de los privados de libertad a la sociedad. Esta afirmación la hago tomando en cuenta únicamente las instituciones jurídicas penitenciarias y penales establecidas en Nicaragua; por otro lado tenemos las realidades de nuestro país y el nivel de cumplimiento y sometimiento de la Administración Penitenciaria y de los propios internos a este sistema, tema que, por nitidez jurídica, no me corresponde abordar en este trabajo.

Durante mi labor investigativa pude observar que el Sistema Penitenciario Nacional está regido por un conjunto de normas penitenciarias y penales, que constituyen el **Derecho Penitenciario Nicaragüense**, derecho que, aunque no bien sistematizado, siempre gira en torno al fenómeno de la **Reinserción Social** de los internos. El reconocimiento constante de éste fenómeno hace que este sistema sea, a mi parecer, muy humanista y centrado en el respeto a la dignidad humana de cada interno, al ofrecerle oportunidades para “*expiar socialmente*” su delito.

Uno de mis puntos de vista personal desde el momento en que empecé a trabajar la investigación, fue en reconocer que el Derecho y el Sistema Penitenciario nicaragüense, no siempre hará efectivo sus objetivos, ya que corresponde a personas su aplicación práctica y el cumplimiento de sus norma y principios no es algo que se

tenga que cumplir por necesidad, sino más bien por voluntad, tanto de los administradores como de los administrados penitenciarios.

Por otra parte siempre he considerado a la pena, fuera de toda tendencia idealista y romántica, como un castigo por una conducta reprochable socialmente, castigo que cumple o puede llegar a cumplir de forma accesoria otros fines, como por ejemplo la Reinserción Social del infractor, como parte de la función preventiva especial de la pena. Entonces, se castiga al infractor, y durante éste castigo se le da la oportunidad de retomar, o de reconocer, las normas sociales de conducta. En conclusión, el fin primordial de la pena no es la reinserción social del infractor, sino su castigo, y este castigo es uno de los factores que más influyen en la conducta del mismo sujeto y en la conducta de los demás miembros de la sociedad, previniéndoles de lo que les espera si recurren a la violación de las normas sociales. De este tema hablo en forma general y no individualizada, ya que existen casos excepcionales en que el infractor es indiferente a la imposición de castigos, y en estos casos particulares las autoridades penitenciarias tienen la obligación de actuar con cautela y aplicar los recursos que les da el Derecho Penitenciario, los cuales son suficientes para cubrir estas excepciones y otras más.

A pesar de todas las anteriores afirmaciones, creo que el castigo tiene que formar parte de un sistema de individualización para cada sujeto, en donde se le da un Tratamiento Penitenciario según las necesidades y según la conducta del mismo, y que se le otorguen estímulos, derechos, beneficios y garantías, a parte de los adquiridos legalmente, por la transformación, por lo menos aparente, de su conducta.

El reconocimiento de la Reinserción Social de los Privados de Libertad está muy marcado en el Sistema Jurídico nacional, aparece en nuestra Constitución Política, y en nuestro Derecho Penal y Penitenciario, incluso lo podemos observar en muchos tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Creo que la máxima por excelencia del Derecho Penitenciario nacional la podemos encontrar en nuestra Carta Magna, la cual establece en su artículo 39 que *“en Nicaragua el Sistema Penitenciario es Humanitario y tiene como Objetivo Fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del Sistema Progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un Carácter Reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo”*. Como podemos notar de este único artículo se desprenden muchos conceptos y principios que a su vez son desarrollados muy claramente por el Derecho Penitenciario, los cuales son:

1. El Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua es **Humanitario**;
2. El Objetivo Fundamental del Sistema Penitenciario es la transformación del interno para **Reintegrarlo a la Sociedad**;
3. Aplicación del **Sistema Progresivo**;
4. El Sistema Penitenciario promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno;
5. Las Penas tienen un **Carácter Reeducativo**;
6. Las **Mujeres Condenadas** guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo.

Además el **Código de la Niñez y la Adolescencia** en su artículo 209 establece que: *durante la ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes, por la comisión infracciones penales, se deberá fomentar las acciones necesarias que le permitan al adolescente su permanente desarrollo personal y la Reinserción a su familia y a la Sociedad*.

En Nicaragua la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, Ley No. 473 establece como fin primordial de la ejecución de la pena, la Reeducción y Reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad. En base al Artículo 6 de la Ley 473, uno de los **Objetivos Fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional** es: Reeducar al interno para su Reinserción Social.

En el **ámbito internacional**, la Reinserción Social de los Privados de Libertad se reconoce en varios cuerpos normativos, como el **Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966** que en su artículo 10 inciso 3, señala que: *“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”*. La **Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969** manifiesta en su artículo 5 inciso 6 que: *“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”*. Las **Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos** de 1957, establece que: *“el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”*.

En cuanto a la imposición de penas privativas de libertad tengo que decir que, si bien es cierto que este tipo de penas es el resultado de la humanización de las sanciones penales y que vino a sustituir la imposición de las penas corporales, que suponían un castigo excesivamente inhumano y degradante, considero que existen otras alternativas a la pena de prisión que son igual o más efectivas. Nadie ignora que las cárceles más que Medios de Reinserción Social son **Escuelas del Crimen** y que son pocos los internos que logran reconocer internamente sus errores y disponerse a seguir las reglas de la sociedad. Es por eso que tengo que decir que el Legislador y los Jueces deben reducir el uso de las penas privativas de libertad como sanción principal por la comisión de ilícitos penales. En sintonía con lo que acabo de decir, el Nuevo Código Penal establece una serie de beneficios o medidas sustitutivas de la pena de

prisión que contribuyen en gran medida a la reducción de la aplicación de las penas privativas de libertad.

No término sin antes concluir repitiendo mi tesis de que no es posible lograr la Reinserción Social de los internos sin una reducción de la pena privativa de libertad, ya sea cualitativamente, o sea reducir su intensidad, o cuantitativamente, reducir su duración, y esto se logra a través de la implementación de sanciones alternativas a la prisión y el otorgamiento de beneficios y estímulos penitenciarios a los privados de libertad. Tanto la reducción cuantitativa como la cualitativa tienen como fin darle al privado de libertad, en el primero de los casos una liberación más próxima en el tiempo de la sujeción penitenciaria y por el otro lado el otorgamiento al interno de libertades y beneficios para comunicarse con el mundo exterior, pero siempre sometido a la sujeción penitenciaria.

Muchas personas y organismos de derechos humanos cuestionan a las Autoridades Penitenciarias por utilizar formas de control que van en contra del Respeto a la Dignidad de los internos, creo que muchas veces estos señalamientos se hacen con fundamentos, pero en otras ocasiones estas personas no comprenden que algunas de estas actuaciones se justifican por las siguientes razones:

1. El interno se integra en una institución que proyecta su autoridad sobre quienes han visto modificado su *status libertatis* en virtud de una decisión judicial, adquiriendo con ello el *status* específico de individuos sujetos a un poder público (relación de sujeción especial), que no es el mismo que existe con carácter general sobre los ciudadanos.
2. A la institución penitenciaria se le encomienda la retención y custodia de los internos y debe de garantizar y velar por la seguridad y buen orden regimental del establecimiento, siendo correlativo a dicho deber el del recluso de acatar y observar las normas de régimen interior.

Además el artículo 6 del Reglamento de la Ley 473 establece que “el Director del Centro Penitenciario donde esté ubicado el interno, podrá **limitar algunos derechos** por motivos de seguridad y tratamiento”.

Por otra parte lo más importante que establece nuestra legislación en cuanto a las **Mujeres Privadas de Libertad** es que deben guardar prisión en Establecimientos Penitenciarios diferentes a los de los hombres, y que la dirección y administración de estos debe estar a cargo de personal del mismo sexo. En el caso de los adolescentes se establece que estos guardaran prisión en **Establecimientos Especiales de Detención Provisional y de Internamiento de Adolescentes**, los cuales estarán a cargo del Sistema Penitenciario Nacional. Debe haber una separación física entre **los internos adolescentes y los adultos, por dos razones muy importantes, por un lado para evitar la** influencia perjudicial y nociva de los adultos en los jóvenes, y por el otro, para establecer un tratamiento esencialmente al de los adultos. Como dice en el desarrollo de mi trabajo, actualmente, en nuestro país, no existe ningún **Establecimiento Penitenciario Especial para Adolescentes**, por ello los adolescentes privados de libertad tienen que cumplir su pena en los Establecimientos creados para adultos, pero con una galería especial para ellos. Los adolescentes privados de libertad no gozan del derecho al Régimen Progresivo, puesto que la pena de prisión se le impone no excede a los seis años de prisión. Cree que es muy tuitiva la numeración que se hace en el artículo 203 del Código de la Niñez y Adolescencia de los delitos que conllevan privación de libertad para los Adolescentes (Asesinato, lesiones graves, violación, robo, tráfico de drogas, etc.) ya que viene a eliminar las posibles arbitrariedades por parte de los jueces al momento de imponer las sanciones.

Una disposición muy acertada que encontré en el Derecho Penitenciario nacional es la establecida en el Artículo 47 de la Ley 473, la cual dice que los jueces, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, los diputados de la Asamblea Nacional, los funcionarios de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales de los Adolescentes y el Inspector General del Sistema Penitenciario, en todo momento y sin mayor trámite, podrán **inspeccionar in situ los Establecimientos Penitenciarios**, para valorar la legalidad de las condiciones de cumplimiento de las

sanciones penales y medidas de privación de libertad. El abogado defensor o los interesados, cuando las autoridades del establecimiento penitenciario hagan caso omiso a sus peticiones o quejas, pueden utilizar esta vía intermedia para denunciar cualquier abuso u omisión en el cumplimiento del ordenamiento jurídico penitenciario.

Me parece que una de las medidas administrativas penitenciarias que viene a contribuir mucho a la reinserción social de los internos es el otorgamiento de **Estímulos**, por el reconocimiento de su buena conducta, disciplina y participación en las diversas actividades reeducativas del Establecimiento Penitenciario, ya que el interno siente y comprende que sus esfuerzos por seguir las normas de conducta vine a traerles beneficios y mejores niveles de vida.

Por otra parte estoy de acuerdo con especialistas en el tema que uno de los principios básicos, sobre los que descansan los Sistemas Penitenciarios Progresivos, es el de considerar que el interno no es un ser separado de la sociedad, y que sigue formando parte de la misma y a ella ha de volver en el momento que cumpla su condena, es preciso pues, que el interno no rompa, en ningún momento, los lazos que le unen con esa sociedad. Esta relación con el mundo exterior se realiza en la práctica penitenciaria a través de contactos directo, como las comunicaciones y visitas dentro del establecimiento, o contactos indirectos, a través de comunicaciones escritas y telefónicas y el acceso a los medios de comunicación. Todos estos tipos de comunicaciones están suficientemente reguladas en nuestro Derecho Penitenciario.

Analizando el contenido del **Nuevo Código Penal** debo decir que este viene a sistematizar más nuestro orden jurídico penal, disponiendo una serie de garantías y principios de aplicación de la ley penal, los cuales son más acorde con el principio constitucional que considera la aplicación de las sanciones penales como medios para lograr la reinserción penal de los que delinquen. Este nuevo cuerpo normativo establece una serie de garantías para los privados de libertad, como por ejemplo:

- Reconocimiento del carácter reeducativo de las penas.

- Nadie puede ser condenado por un delito o falta que no esté prevista en ley anterior a su comisión.
- Nadie puede ser sancionado con penas que no estén previamente establecidas.
- En ningún caso la Administración Pública podrá imponer medidas o sanciones que impliquen privación de libertad.
- Establece la **Excepción de Retroactividad Pro Reo** de la ley penal, la cual quedó explicada en el desarrollo del trabajo.
- Reconoce el respeto a la dignidad humana de los imputados y condenados.

El Nuevo Código Penal establece el Principio de **Garantía Jurisdiccional de Ejecución**, que prohíbe la ejecución de pena o medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por los tribunales de justicia competentes, de acuerdo con las leyes procesales. Tampoco se podrá ejecutar pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan. La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes, de conformidad con la ley y su reglamento.

La regla por excelencia en materia de defensa de los derechos penitenciarios la tenemos en el **Código Procesal Penal**, Ley No 406, en su artículo 402, el cual dice: *“El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultades que le otorgan la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Nicaragua, las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos, y planteará ante el tribunal que corresponda las observaciones, recursos e incidencias que con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes”*.

Muy importante en nuestro Derecho Penitenciario es la figura del **Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria**, que nace con el Código Procesal Penal, el cual establece que los Jueces de Ejecución de Pena controlarán que las penas y de las medidas de seguridad se ejecuten observando sus finalidades constitucionales y legales, y tendrán las atribuciones que les señale la legislación procesal penal.

La función de estos jueces las podemos dividir en dos facetas diferentes, por un lado el Juez de Ejecución responde al propósito de judicializar la ejecución, es decir, a reforzar la garantía de ejecución, convirtiéndola de administrativa en judicial, y por otro el Juez de Ejecución se convierte en el garante del correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en los casos en los que directa y particularmente resulten afectados los derechos de los internos, o sea es un Juez de Vigilancia Penitenciaria. Entonces tenemos por un lado a un Juez de Ejecución propiamente dichos que conocerá sobre los incidentes de ejecución de condena, libertad condicional, y cualquier tipo de medida de acortamiento de la condena, resolver los recursos contra la Administración Penitenciaria, y en General todos aquellos asuntos referentes al cumplimiento de pena impuesta y resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo previsto en las leyes y reglamentos. Por otro lado, dentro de la misma figura judicial, tenemos al Juez de Vigilancia Penitenciaria, con funciones que exceden del marco estricto de la ejecución penal y afecta a todos los internos, como por ejemplo: salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse, aprobar las sanciones de aislamiento en celda, resolver por vía de recurso, las reclamaciones formuladas contra sanciones disciplinarias, decidir sobre las peticiones y quejas formuladas en relación con derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios afectados por el régimen o el tratamiento, visitar los establecimientos penitenciarios, etc.

RECOMENDACIONES

Creo que la Administración Penitenciaria debe, a la hora de hacer la clasificación regimental y tratamental de un interno, tomar en cuenta, los siguientes parámetros: personalidad, historial individual, familiar, social y delictivo del interno, tipo criminológico, capacidad criminal, adaptabilidad social, sectores o rasgos de personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva, conducta global, así como también la duración de la pena, el medio al que probablemente retornará, recursos, facilidades y dificultades existentes, etc.

La Administración Penitenciaria debe reconocer la voluntariedad del tratamiento, el derecho del interno a participar y la incentivación de la colaboración al mismo. La satisfacción de sus intereses personales debe ser tenida muy en cuenta, y la Administración Penitenciaria debe aceptar la decisión del interno de rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad o método de tratamiento, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales, ni de regresión de régimen. La clasificación debe realizarse, en estos últimos términos mediante la observación directa del comportamiento y utilización de los datos documentales existentes.

La Administración Penitenciaria debe implementar nuevos métodos de tratamiento penitenciario, como la utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación con la personalidad del interno. Realización de terapias de comportamiento y de procedimientos tendentes a modificar el sistema de actitudes del interno cuando sean desfavorables o negativas, todo ello con absoluto respeto a la personalidad del mismo. Además la Administración Penitenciaria debe contar con especialistas capacitados para la realización de cada una de estos métodos de tratamiento. Creo que el interno, más que un criminal en resocialización, debe ser tratado como un paciente.

El Sistema Penitenciario Nacional debe superar el Sistema Progresivo y evolucionar al **Sistema de la Individualización Científica**, en donde sean decisivos, predominantemente, para la progresión o regresión los criterios que radican en la persona (comportamentales o de evolución de la personalidad) y no los externos o jurídico-penales, y sin exigencias de permanencia de tiempos mínimos en cada régimen para la superación del mismo.

Por otra parte creo que se deben crear **Establecimientos Penitenciarios** para cada tipo de Régimen, un Establecimiento para los internos con Régimen de Adaptación, otro para los del Régimen Laboral y otros para el Semiabierto y Abierto. De la misma manera debe hacerse para los Privados Preventivos, para los adolescentes, las mujeres, y además crear Establecimientos Penitenciarios de Atención Psiquiátrica y Centros de Rehabilitación Social.

Es urgente que se creen los Establecimientos **Especiales de Detención Provisional y de Internamiento de Adolescentes**, donde el régimen de vida se caracterice por una acción educativa intensa y el sistema de convivencia y la organización de la vida dentro del establecimiento garantice el desarrollo de los siguientes programas fundamentales:

1. Un programa de formación educativa básica y permitir el acceso del interno a todos los niveles establecidos por el Ministerio de Educación.
2. Un programa de formación laboral, para poder incorporarse al mundo del trabajo con conocimientos y habilidades para ejercer una profesión o un oficio.
3. Un programa de formación cultural para que el interno aproveche el tiempo libre con finalidades formativas y la profundización en los valores cívicos.
4. Un programa dirigido a la educación física y el deporte que permita además de mejorar el estado de su organismo, liberar tensiones tanto físicas como psicológicas.
5. Un programa de intervención dirigido a aquellas problemáticas de tipo psicosocial, de drogodependencias o de otro tipo que dificulten la integración social normalizada de los internos.

Que se de un seguimiento postpenitenciario al egresado de prisión con el fin de evitar posibles reincidencias delictivas y con el fin de valorar el nivel de efectividad del tratamiento penitenciario aplicado. Pero no simplemente recomendando el monitoreo del egresado *per se*, sino que también que el Estado disponga de medios tratamentales, jurídicos, y de ayuda social para asegurarle una vida en libertad digna.

Por último, creo que es factible estructurar un sistema de penas en que la reacción normal son las penas alternativas, aunque para ello se requiere reformar el sistema legal, posibilitando la imposición de **penas alternativas** para muchos delitos actualmente castigados con penas de prisión, y el sistema judicial, creando un personal de apoyo a los jueces destinado a informar y controlar la imposición de penas alternativas. Un sistema de penas alternativas que pretenda, principalmente, reducir el uso de la prisión, pero, además, debe poder considerar otros fines secundarios, como es principalmente la rehabilitación del infractor. La pena alternativa debería atender a la necesidad específica que pueda tener el infractor de participar en algún programa de carácter rehabilitador.

LISTA DE REFERENCIAS

I. LEGISLACIÓN

Ley No. 641, "*Código Penal de la República de Nicaragua*", publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 83, 84, 85, 86 y 87 de los días 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008.

Ley No. 406, "*Código Procesal Penal*", publicada en La Gaceta, Diario Oficial el 21 y 24 de diciembre del 2001.

Ley No. 287, "*Código de la Niñez y la Adolescencia*", publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 97, del 27 de mayo de 1998.

Ley No. 473, "*Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena*" publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 222, del 21 de noviembre del 2003.

Decreto No. 16-2004, "*Reglamento de la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena*" publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.54 del 17 de marzo del 2004.

Ley No. 290, "*Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo*", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 102 del 3 de Junio de 1998.

Ley N° 260 "*Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua*"
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 137 de 23 de julio de 1998.

Convenio entre Nicaragua y España sobre el Cumplimiento de las Condenas Penales, Firmado el día 18 de febrero de 1995 en Managua, entró en vigor el 15 de mayo de 1997.

Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y sus Reformas.

II. LIBROS, MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Alarcón Bravo, J. (s. f.). ***Cumplimiento De La Pena Privativa De Libertad: Efectividad Material***. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Alonso De Escamilla, A. (1985). ***El juez de Vigilancia Penitenciaria***. Madrid: Civitas.

Arroyo, J. M. (2000). ***Relaciones administración-jurisdicción en la ejecución penal según el nuevo Código Procesal Penal***. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. No. 18.

Barrientos Pellicer, C. R. y otros. (2006) ***Manual de Derecho Procesal Penal Nicaragüense***. (2ª ed.) Valencia: Tirant Lo Blanch.

Brenes Guevara, B. (2002) ***El Sistema Progresivo del Régimen Penal en el Centro Penitenciario Tipitapa***. Monografía de Derecho. Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.

Cabo del Rosal, M. (dir.) (1986). Comentarios a la Legislación Penal: Ley Orgánica General Penitenciaria". T. VI, Vols. 1.º y 2.º. Madrid: Edersa.

Cid Miliné, J. (s. f.). ***El Sistema de Penas desde una Perspectiva Reduccionista: Alternativas a la Pena de Prisión.*** Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

García Valdés, C. (1998). ***Introducción al Derecho Penitenciario Español.*** España: Civitas.

Nistal Burón, J. (s. f.) ***El Régimen Penitenciario: Diferencias Por Su Objeto. La Retención Y Custodia/ La Reeducción y Reinserción.*** Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Sandoval Huertas, E. (1998). ***Penología, Parte General y Especial.*** Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Segovia Bernabé, J. L. (s. f.). ***Problemática en Torno a la Reinserción Social.*** Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

III. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Arribas López, E. (2007). ***“El derecho penitenciario del enemigo”.***
Recuperado el 22 de abril de
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Publicaciones/General/Revistas
Peniteniciarias/ Revista_253-2007.pdf](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Publicaciones/General/Revistas%20Peniteniciarias/Revista_253-2007.pdf)

Fernández Arévalo, L. (2005). ***“Derecho penitenciario y extranjería”.***
Recuperado el día 2 de diciembre de 2009,
<http://www.intermigra.info/intermigra/archivos/PenitInterm.pdf>

José Luis Segovia Bernabé, J. L., "**Consecuencias de la prisionización**", Recuperado el 2 de diciembre de 2009, http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_7.pdf

Revista Envío (No. 64 Octubre 1986). "**Las cárceles y la justicia en Nicaragua**", Recuperado: el 7 de Diciembre de 2009, <http://www.envio.org.ni/articulo/500>

SOTO NAVARRO, S., "**La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia**", Recuperado el 7 de Diciembre de 2009, <http://criminnet.ugr.es/recpc>, págs. 1-46.

SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J., "**El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad**", Recuperado el 7 de Diciembre de 2009, <http://criminnet.ugr.es/recpc>, págs. 1-20.

ANEXOS

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Foto

CARNET DE VISITANTE

Nombre del Visitante: _____

Número de Cédula : _____

Parentesco

Domicilio

Nombre del interno : _____

Firma

Jefe Dpto. Reeducción Penal

Ministerio de Gobernación
Sistema Penitenciario Nacional
Centro Penitenciario _____

AUTORIZACIÓN DE CONVIVENCIA FAMILIAR

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones del privado de libertad con su núcleo familiar y prepararlo para su reinserción social, en cumplimiento del Arto. 60 de la Ley 473 "Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena" y los Artos. 114, 115 y 116 del Decreto 16-2004, Reglamento de la misma Ley; dispone otorgar el "**Régimen de Convivencia Familiar**" al _____ (la) _____ interno (a) _____ hasta la fecha que cumpla su condena.

Dado en la ciudad de Tipitapa, departamento de Managua, a los _____ días del mes de _____ del _____.

Director General
Sistema Penitenciario Nacional

Ministerio de Gobernación
Sistema Penitenciario Nacional
CENTRO PENITENCIARIO _____

EVALUACIÓN PARA PROGRESAR EN RÉGIMEN

PROGRESIÓN DEL RÉGIMEN _____ AL _____

I.- DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres	:
Delito (s)	:
Autoridad Judicial	:
Situación legal	:
Fecha de captura	:
Fecha de ingreso al Centro Penal	:
Fecha que cumple la condena	:
Antecedente Penitenciario	:
Régimen Penitenciario actual	:
Fecha de progresión	:
Situación familiar	:
Zona de origen del evaluado	:

II.- RUTA PROGRESIVA

Régimen Laboral	:	_____
Régimen Semi Abierto	:	_____
Régimen Abierto	:	_____
Régimen Convivencia Familiar	:	_____

III.- DISCIPLINA Y CONDUCTA OBSERVADA DURANTE EL PERÍODO EVALUADO:

IV.- ESTÍMULOS RECIBIDOS Y/O SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS:

V.- INTEGRACIÓN AL TRABAJO PENITENCIARIO:

VI.- INTEGRACIÓN A LA INSTRUCCIÓN ESCOLAR:

VII.- INTEGRACIÓN A LA CAPACITACIÓN TÉCNICA:

VIII.- INTEGRACIÓN A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES:

IX.- CONCLUSIONES:

X.- OPINIÓN DEL TIP

Se extiende la presente evaluación a los ____ días del mes de _____ del 2,004.

Medico

Jefe de Sección Galería

**Jefe de Departamento
Seguridad Penal**

**Jefe de Departamento de
Reeducación Penal**

**Jefe de Departamento
Orden Interior**

Director Centro Penitenciario

Portada de Libreta de Control

Ministerio de Gobernación Sistema Penitenciario Nacional

LIBRETA DE CONTROL INDIVIDUAL

Apellidos y Nombres del interno : _____

Número de expediente penitenciario : _____

Reverso de la Portada

Foto

Datos Generales:

Fecha y lugar de nacimiento: _____

Estado civil : _____

Nacionalidad: _____

Profesión u oficio: _____

Última ocupación laboral: _____

Dirección del domicilio: _____

Primera Página

Situación Legal:

Fecha de captura: _____ Fecha de ingreso : _____

Delito (s): _____

Condena (s): Años _____ Meses _____ Días. Multa _____

Autoridad Judicial: _____ Número de causa: _____

Fecha Sentencia Condenatoria: _____ Fecha extingue la pena: _____

Descripción de Antecedentes Penitenciarios:

Fecha de Captura	Fecha de Ingreso	Delito	Autoridad Judicial	Situación Legal	Fecha de Egreso	Motivo de egreso	Centro Penitenciario

Síntesis del delito (s): _____

Ruta Progresiva : _____

Régimen Laboral : _____

Régimen Semi Abierto	:	_____
Régimen Abierto	:	_____
Régimen Convivencia Familiar	:	_____

Segunda Página

Fecha	Contenido de anotación	Firma
	<p>Contenido de Evaluación Trimestral:</p> <p>Fecha : _____</p> <p>Nombre del Oficial que la realiza : _____</p> <p>Período evaluado : _____</p> <p>Régimen penitenciario : _____</p> <p>Ubicación física del interno : _____</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Disciplina y conducta. ❖ Integración al trabajo penitenciario. ❖ Integración a la instrucción escolar, general y capacitación técnica. ❖ Integración al arte, deporte y recreación. ❖ Integración a las actividades religiosas. ❖ Situación de salud. ❖ Relación con su núcleo familiar. ❖ Estímulos otorgados. ❖ Prerrogativas especiales recibidas. ❖ Otros aspectos de interés <p>Anotaciones Sistemáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Integración a actividades reeducativas. 	

	<ul style="list-style-type: none">❖ Suspensión de actividades reeducativas (sanción o abandono).❖ Infracciones.❖ Sanciones.❖ Estímulos.❖ Condiciones excepcionales de salud.❖ Entrevistas con autoridades y organismos.❖ Charlas, seminarios y conferencias.❖ Otras	
--	--	--

Ministerio de Gobernación
Sistema Penitenciario Nacional

RUTA PROGRESIVA

Apellidos y Nombres	:	
Delito	:	
Condena	:	
Antecedentes penitenciarios	:	
Fecha de captura	:	
Fecha de ingreso	:	
Fecha de sentencia condenatoria:		
Nacionalidad	:	

Ruta progresiva	Fecha programada	Fecha real de progresión	Fecha progresión por estímulo
Régimen Laboral			
Régimen Semi Abierto			
Régimen Abierto			
Régimen Convivencia Familiar			

Jefe Reeducción Penal

(Dorso)

[illegible]

**Ministerio de Gobernación
Dirección General Sistema Penitenciario Nacional**

ORDEN DE PERMISO DE SALIDA DE INTERNO

Centro Penitenciario _____

I. DATOS GENERALES:

Apellidos y Nombres	:
Edad	:
Delito (s)	:
Condena	:
Autoridad Judicial	:
Fecha de Captura	:
Fecha que extingue la pena	:
Régimen Penitenciario	:
Ubicación Física del Reo	:

II. CADUCIDAD DEL PERMISO:

Fecha y hora de salida	:
Fecha y hora de regreso	:

III. FUNDAMENTO DEL PERMISO DE SALIDA:

Se concede permiso de salida sobre la base al Arto. 136 del Decreto 16-2004, "Reglamento de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena.

IV. MOTIVO DEL PERMISO:

V. DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DONDE GOZARÁ EL PERMISO:

Dado en la Ciudad de _____ a los días del mes de _____ del _____

Firma y Sello del Director del Centro